

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**

**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**

Trabajo de Disertación Escrita previo a la obtención del título de  
Licenciada en Ciencias Jurídicas

**La práctica de los distintos medios de prueba dentro de la  
investigación del delito de lavado de activos**

**María Isabel Ordóñez Cevallos**

**Director: Dr. Jorge Machado Cevallos**

**Quito-Ecuador**

**2011.**

## **DEDICATORIA**

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas.”

Frank Clark

Dedicado a mis angelitos en la tierra, mi familia, quienes cada día me enseñan nuevas lecciones sobre alcanzar sueños y nuevas metas y que el cariño de quienes te aman es la única arma que se necesita en cada batalla de esta vida.

Gracias a ustedes y a su amor incondicional la vida me dio una segunda oportunidad.

## SUMARIO

La presente disertación tiene como objetivo fundamental, evidenciar algunas de las insuficiencias en materia probatoria que existen dentro de los procesos nacionales en lo que respecta a lavado de activos, un delito que en Ecuador se ha proliferado de gran manera en los últimos años.

Se resaltan y analizan además, algunas de las positivas reformas que el gobierno nacional ha implementado en relación a la prevención y detección de este delito en los últimos años.

Tomando en cuenta algunos de los sectores de mayor vulnerabilidad al blanqueo de capitales para indicar algunos de los múltiples tipos de lavado de dinero que las redes criminales utilizan, se puede determinar las falencias en cada uno de ellos y los medios de prueba con los que pueden contribuir los distintos entes reportantes de actividades sospechosas y entidades de control, además de algunas opciones a considerar por la fiscalía que podrían servir de apoyo cuando se lleve a cabo la etapa probatoria en estos procesos.

El análisis de la primera sentencia a nivel nacional (Hernán Prada y otros) por este delito, nos permite identificar aquellos medios utilizados en la investigación y verificar su eficacia probatoria dentro del proceso penal y cuales pruebas deben ser reforzadas en futuras operaciones.

Utilizando las técnicas de investigación correlacional y el método Inductivo-Deductivo se busca finalmente, tomando en consideración algunas experiencias y técnicas que han tenido éxito a nivel internacional, identificar algunos métodos de vanguardia que deberían ser considerados por nuestros investigadores para procurar resultados óptimos y determinar cuáles son los medios probatorios que aportan mayor convicción al juez y deben ser utilizados en la investigación, juzgamiento y posterior

prevención de este delito que afecta el orden económico, social, la seguridad financiera y estabilidad institucional ecuatoriana.

# INDICE

## *Contenido*

## *Página*

### INTRODUCCION

### CAPITULO I

#### **El origen ilegal del dinero, sectores propensos a reportar operaciones sospechosas**

<b>1.1 Sector Bursátil</b>	<b>2</b>
<b>1.1.1. Entidades de control del mercado</b>	<b>3</b>
<b>1.1.2. Participantes del mercado de valores autorizados</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Sector Financiero</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Juegos de azar, loterías, casinos</b>	<b>8</b>
<b>1.3. Sector aduanero, tributario</b>	<b>11</b>
<b>1.4. Sector empresarial y micro empresarial</b>	<b>16</b>
<b>1.5. Sector inmobiliario</b>	<b>17</b>
<b>1.6. Sector Deportivo, el futbol</b>	<b>18</b>
<b>1.6.1. Vulnerabilidades del sector</b>	<b>20</b>

### CAPITULO II

#### **Medios probatorios frecuentemente utilizados en los procesos judiciales nacionales**

<b>2.1 La prueba indiciaria del origen ilícito de los bienes</b>	<b>29</b>
<b>2.2 La prueba testimonial</b>	<b>34</b>
<b>2.3 La prueba documental</b>	<b>38</b>
<b>2.4 La prueba pericial</b>	<b>44</b>

### **CAPITULO III**

#### **El caso de Hernán Prada, análisis y verificación de la eficacia de los medios probatorios empleados**

<b>3.1. Reseña del caso (Juicio Penal No.249-Ln-2008)</b>	<b>50</b>
<b>3.2. Análisis de los medios de prueba empleados</b>	<b>54</b>
<b>3.2.1. Prueba documental</b>	<b>55</b>
<b>3.2.2. Prueba testimonial</b>	<b>59</b>
<b>3.2.3. Prueba pericial</b>	<b>64</b>
<b>3.2.4. Deficiencias investigativas</b>	<b>67</b>

### **CAPITULO IV**

#### **Medios probatorios alternativos a considerar en las investigaciones de lavado de activos.**

<b>4.1 La autonomía del delito y la cooperación internacional</b>	<b>74</b>
<b>4.2 Las operaciones encubiertas</b>	<b>77</b>
<b>4.3 La prueba documental reforzada</b>	<b>80</b>
<b>4.4 El conocimiento del cliente, reporte de operaciones sospechosas</b>	<b>82</b>
<b>4.5 La importancia de la prueba indiciaria</b>	<b>85</b>
<b>4.6 Pruebas periciales especializadas</b>	<b>88</b>

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>94</b>
---------------------	-----------

<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>97</b>
------------------------	-----------

<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>100</b>
---------------------	------------

## INTRODUCCIÓN

La proliferación de organizaciones criminales que se dedican al blanqueo de capitales producto de delitos precedentes, es un grave problema que nuestro país ha afrontado en los últimos años.

Como en cualquier negocio legítimo, una empresa criminal requiere rápido acceso a las ganancias adquiridas a través de la venta de bienes o servicios. A diferencia de una industria legítima, la empresa delictiva no puede operar abiertamente, debe encubrir “la naturaleza, ubicación, origen, pertenencia o control de beneficios derivados de su “negocio”, para evitar ser descubierto por las autoridades competentes.

A través del lavado de activos, el criminal transforma los ingresos monetarios derivados de una actividad criminal en fondos resultantes, aparentemente, de una fuente legal, por éste motivo, los investigadores deben estar al día con los mecanismos de los que se vale la delincuencia para ejecutar éstas operaciones.

Existen sectores que evidencian una particular vulnerabilidad en relación al acceso para los blanqueadores de activos, se han identificado algunos de los métodos más utilizados por los criminales en cada sector, y las falencias de los mismos en lo que respecta a prevención detección y control del lavado de activos dentro de cada uno de ellos.

Un análisis de los medios probatorios de mayor aplicación nacional, en base a experiencia real, permitió en esta disertación, concluir que en materia de investigación de delitos financieros nuestro país aún tiene mucho trabajo que realizar. La falta de metodología investigativa, personal idóneo, falta de recursos tecnológicos, entre otros, han sido la principal causa para que los procesos penales no culminen exitosamente, la

carga probatoria carece de fuerza demostrativa por lo rudimentario de los medios empleados.

El estudio de la primera sentencia que por lavado de activos se emitió en Ecuador, en el caso “Torres Gemelas”, en el cual se desarticuló una alarmante red de lavado asociada al narcotraficante colombiano Hernán Prada, evidencia la hipótesis de que carecemos de los elementos necesarios para la lucha contra este delito que atenta gravemente contra la seguridad y economía nacional.

Con estos antecedentes es necesaria la aplicación de elementos probatorios de vanguardia utilizados como los empleados en operaciones extranjeras que han tenido éxito en esta materia, de igual manera se propone reforzar los medios aplicados en la mayoría de casos y conducir las investigaciones a su finalidad, frenar el avance de este delito a nivel nacional y sancionar a los involucrados.



## **CAPITULO I**

### **El origen ilegal del dinero, sectores propensos a reportar operaciones sospechosas**

La actividad criminal hoy en día, genera un volumen de dinero incalculable, y es internacionalmente uno de los más graves problemas para las autoridades. Los actos ilícitos se cometen a nivel mundial y sus ganancias se expanden por todos los países para ser indecentadas por los agentes locales, especialmente los criminales se valen de naciones en las cuales es mínimo el control de ingreso e integración de capitales mal habidos, como los paraísos fiscales y actualmente países como el nuestro, en los que por la falta de mecanismos óptimos para la investigación y detección oportuna se les permite manipular a su antojo varios sectores económicos e infectarlos con los recursos fruto de sus operaciones ilegítimas.

En el Ecuador, son varios los sectores propensos a reportar indicios de actividades de blanqueo, estas áreas son amenazadas por una cantidad de tipologías de lavado, que por el ingenio y astucia de los infractores son casi indetectables y se mezclan con las actividades regulares de cada sector tornándose imposibles de investigar.

Dichas esferas de la economía, se rigen por una entidad de control que en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional y demás instituciones inmersas, han instaurado sistemas de identificación de riesgo de lavado de activos; no obstante, el último informe presentado en el 2010 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), catalogó al país como una nación que “*representa*

*un riesgo para el sistema financiero internacional*”, por no haberse comprometido con su plan de acción y no cumplir con los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo.

Por esta razón, es necesario realizar una sinopsis de aquellos sectores que son mayormente proclives a ser objeto de maquinaciones delictivas y a partir de estos, establecer los medios investigativos y posteriormente probatorios que en los procesos de juzgamiento de este delito se deben manejar para obtener prósperos resultados.

### **1.1 Sector Bursátil**

Canaliza los recursos financieros hacia las actividades productivas a través de la negociación de valores constituyendo una fuente directa de financiamiento y una interesante opción de rentabilidad para los inversionistas. Está conformado por ofertas, demandas y negociaciones de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de valores de cada ciudad, y por los intermediarios acreditados, conforme lo establecido en la Ley, expedida en 1998. De acuerdo a esta, el Consejo Nacional de Valores (CNV) establece la política general del mercado de valores y regula su actividad, organismo presidido por el Superintendente de Compañías, y conformado por siete miembros, cuatro del sector público y tres del sector privado.

El Mercado de Valores está compuesto por los siguientes segmentos:

- **PUBLICO**, son las negociaciones que se realizan con la intermediación de una casa de valores autorizada.

- PRIVADO, son las negociaciones que se realizan en forma directa entre comprador y vendedor, sin la intervención de una casa de valores.
- PRIMARIO, es aquel en el cual se realiza la primera venta o colocación de valores que hace el emisor con el fin de obtener directamente los recursos.
- SECUNDARIO, comprende las negociaciones posteriores a la primera colocación de valores.

#### **1.1.1. Entidades de control del mercado**

- *CONSEJO NACIONAL DE VALORES es el órgano adscrito a la Superintendencia de Compañías que establece la política general del mercado de valores y regula su funcionamiento.*
- *SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS es la institución que ejecuta la política general del mercado de valores y controla a los participantes del mercado.*
- *BOLSAS DE VALORES a través de su facultad de autorregulación pueden dictar sus reglamentos y demás normas internas de aplicación general para todos sus partícipes, así como, ejercer el control de sus miembros e imponer las sanciones dentro del ámbito de su competencia.*

#### **1.1.2. Participantes del mercado de valores autorizados:**

- *EMISORES, son compañías públicas, privadas o instituciones del sector público que financian sus actividades mediante la emisión y colocación de valores, a través del mercado de valores.*

- *INVERSIONISTAS, son aquellas personas naturales o jurídicas que disponen de recursos económicos y los destinan a la compra de valores, con el objeto de lograr una rentabilidad adecuada en función del riesgo adquirido. Para participar en el mercado de valores no se requiere de montos mínimos de inversión.*
- *BOLSAS DE VALORES, son corporaciones civiles sin fines de lucro que tienen por objeto brindar los servicios y mecanismos necesarios para la negociación de valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y precio justo.*
- *CASAS DE VALORES De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores del Ecuador, en su artículo 56, las casas de valores como compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías para ejercer la intermediación de valores, están autorizadas entre otras actividades, para operar en los mercados bursátil y extrabursátil a través de las Bolsas de Valores del país, administrar portafolios de valores o dineros de terceros para invertirlos en instrumentos del mercado, brindar asesoría e información en materia de intermediación, de finanzas, de estructuración de portafolios de valores, adquisiciones, fusiones, escisiones u otras operaciones, además de promover fuentes de financiamiento, para personas naturales o jurídicas y entidades del sector público.*
- *DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, es una compañía anónima que se encarga de proveer servicios de depósito, custodia, conservación, liquidación y registro de*

*transferencia de los valores. Opera también como cámara de compensación.*

- *CALIFICADORAS DE RIESGO, son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, independientes, que tienen por objeto la calificación de emisores y valores.*
- *ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS son compañías anónimas que administran fondos de inversión y negocios fiduciarios.<sup>1</sup>*

La entidades participantes del mercado de valores corren el riesgo de ser blanco de los lavadores de dinero que aprovechando el leve control verificado está área recibe en el país, que a diferencia de otros países no cuenta con un sistema integral de ALM (Anti Money Laundering) los faculta a realizar negociaciones a través de valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores o efectuar operaciones ficticias para manipular o fijar falsamente precios o cotizaciones. En si manipular las inversiones de manera ilícita.

## **1.1.Sector Financiero**

*Comprende la suma de instituciones, medios y mercados, cuyo propósito es la canalización y ahorro que generan las unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit.<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> <http://www.bolsadequito.info/inicio/conozca-el-mercado/el-mercado-de-valores/>

<sup>2</sup> Francisco Moya Arjona, El Sistema Financiero Español,  
(<http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml>)

El sistema financiero ecuatoriano está conformado por Bancos Privados y Públicos, Instituciones Financieras de Segundo Piso, Casas de Cambio, Cooperativas dedicadas al Ahorro y Crédito para la Vivienda, Compañías de Seguros, y demás entidades no financieras directas. Las antedichas instituciones para su funcionamiento deberán estar a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria, cuyo tamaño depende del tipo o clase de entidad de acuerdo al monto mínimo de Capital.

*El sistema financiero ecuatoriano sufrió una de las peores crisis en el año 1999, como consecuencia se han cerrado aproximadamente unos 30 bancos. Cabe resaltar que con la adopción del dólar como moneda oficial del Ecuador, las Casas de Cambio tienden a desaparecer. Es importante destacar, que la Superintendencia de Bancos y Seguros no depende del Banco Central, es un órgano separado, que tiene autonomía administrativa, económica y financiera y personería de derecho público.<sup>3</sup>*

El sistema se compone de:

- 38 Bancos: 8 públicos, 24 privados nacionales y 6 privados extranjeros
- 6 Mutualistas
- 44 Cooperativas de ahorro y crédito
- 5 Almacenes de depósito
- 42 Compañías aseguradoras

---

<sup>3</sup> GAFISUD, Ecuador, Informe sobre evaluación mutua, 2007, (<http://www.gafisud.info/pdf/InformeEcuador.pdf>)

Todas estas instituciones manejan capitales que son reinvertidos en actividades variadas con el objeto de producir intereses que promuevan más volumen de dinero, al recibir depósitos del público son los principales agentes de transferencia, por ende, el instrumento más importante para los delincuentes en su proceso de inserción de ganancias con apariencia de legalidad.

En países conocidos como “paraísos fiscales” o centros financieros off shore, las instituciones financieras manejan un sistema que no prioriza la identificación, registro y determinación de operaciones de sus clientes pero opera una reserva bancaria muy desarrollada, es aquí donde se registran la mayoría de cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas a nivel mundial, no obstante, estos capitales necesitan ingresar en el curso legal de distintos países para y ser disfrutados por sus propietarios, es ahí cuando se ven afectadas las instituciones financieras nacionales que asisten a la delincuencia en sus fines, más aun en países como el nuestro en el que es muy leve el control de ingreso de divisas, se perpetúan constantemente operaciones que pasan inadvertidas por las autoridades.

En materia de lavado de activos, este sector es uno de los más vulnerables puesto que, si bien cada institución financiera tiene un registro minucioso de datos de cada uno de sus clientes, y manejan sistemas de reporte de operaciones sospechosas en coordinación con la Fiscalía, Superintendencia de Bancos y otras instituciones de control, los lavadores de dinero tienen a su favor un sinnúmero de modalidades de las que se valen para perpetrar este

delito, entre las más frecuentes e indetectables contamos con la de asumir el perfil de clientes ordinarios; utilizar testaferros para crear varias cuentas que minimicen los volúmenes de capital a lavarse; inversión en industrias que generen grandes cantidades en efectivo, dificultando la detección de ilegalidad por la trayectoria crediticia del negocio; utilización de cuentas inactivas, en complicidad con funcionarios de la institución; aparentes depósitos errados para transferencia de fondos mediante cheques certificados por el banco; cuentas fictas con remesas enviadas del extranjero por migrantes a sus familias, etc. *Todo esto con el objeto de formar un rastro de transacciones complicado, hacer ambiguo el origen y propiedad del dinero y mezclar dineros ilegales con transacciones financieras legítimas.*<sup>4</sup>

## **1.2. Juegos de azar, loterías, casinos**

Los casinos y salas de juego desde siempre han sido motivo de polémica en la sociedad, por una parte el sector turístico asegura que fomentan el empleo y las inversiones, sus detractores, sostienen que promueven el vicio, la prostitución y la delincuencia. Lo cierto es que, igual que los bancos, las fiduciarias y otras entidades son vulnerables al lavado de dinero, ya que manejan una considerable cantidad de efectivo, efectúan transacciones a alta velocidad y conocen en lo mínimo a sus clientes, lo que representa un atractivo para los criminales, que necesitan un espacio seguro para disimular la fuente oscura de sus fondos.

---

<sup>4</sup> Nova Martínez Andrés Leonardo, Tipología básica del lavado de activos en el sector financiero colombiano y responsabilidad del contador público, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Septiembre de 2006, Pág. 14



En Ecuador, se define a un casino como aquel establecimiento autorizado para ofrecer servicios y facilidades para la práctica de todo tipo de juegos de envite o azar. Para ejercer su actividad requieren una autorización de funcionamiento del Ministerio de Turismo, operar juegos de azar y no de destreza, y que sean parte de hoteles de lujo y primera categoría.<sup>5</sup>

El Artículo 32 del Reglamento de Casinos, Salas de Juego y Bingos Mecánicos, describe a las salas de juego, como locales autorizados para organizar permanentemente el denominado juego mutual de bingo.

Los casinos pueden blanquear dinero de dos principales formas, en la primera los blanqueadores son quienes los instalan para estos fines, en otros casos los operadores legítimos trabajan en complicidad con alguna organización delictiva, o finalmente los lavadores trabajan bajo el perfil de clientes que regularmente frecuentan el establecimiento y mueven pequeñas cantidades de dinero para no despertar sospechas.

Pese a que en los últimos años se han decomisado máquinas tragamonedas y han sido clausurados varios establecimientos por carecer de los permisos y normas básicas de funcionamiento, persisten espacios clandestinos que operan en su mayoría financiados con capitales ilegales. Al mismo tiempo la vulnerabilidad en este sector se verifica en los centros autorizados, en los que para su ciclo de lavado de activos los infractores se valen de estos casinos y salas de juego, ingresando valores que son canjeados por fichas de juego, para

---

<sup>5</sup> Artículo 43, Reglamento General a la Ley de Turismo; Artículo 4, Reglamento de Casinos, Salas de Juego y Bingos Mecánicos; Artículo 3, Normas Técnicas de Casinos y Salas de Juego Bingo Mecánicos..

posteriormente ser cambiadas por dinero lícito mediante cheques del establecimiento.

La detección de actividades sospechosas es fundamental, generalmente se arrojan indicios de clientes que, en forma continua, solicitan canjear en caja efectivo o fichas por cheques; que adquieren un volumen considerable de fichas de juego con billetes de baja denominación; que realizan en forma continua, la apuesta máxima permitida en la mesa, sin que esto guarde relación con su perfil económico; clientes cuyas apuestas son desproporcionadas en relación a la expectativa del premio; que obtienen premios con frecuencia inusual; que muestran interés por entablar contacto con los ganadores de los juegos de azar, premios o sorteos; que desempeñan o ha desempeñado funciones públicas destacadas dentro o fuera del país, entre otras. De igual manera es preciso detectar en los mismos empleados del establecimiento conductas sospechosas, ya que es muy frecuente que los clientes en complicidad con los trabajadores del lugar lleven a cabo sus fines.<sup>6</sup>

En lo que respecta a loterías y sorteos, en el país, las más reconocidas pertenecen a la Lotería Nacional, institución administrada por Junta de Beneficencia de Guayaquil, su recaudación está destinada principalmente para el financiamiento de obra social en todo el territorio nacional. En este ámbito, el riesgo de la presencia de lavadores de dinero, especialmente proveniente del narcotráfico colombiano, se puede identificar en la lotería, según el coronel Marcelo Tobar, jefe de la Policía Antinarcóticos del Guayas en una entrevista

---

<sup>6</sup> UIF Ecuador , Riesgo de lavado de activos en casinos y salas de juego, Presentación PDF, 2010

para diario El Expreso de Guayaquil, afirma que “identifican a los ganadores de los billetes de lotería y les ofrecen comprarles el billete por la cantidad que ganó, o le duplican la ganancia. Le dicen a la persona que esa suma es libre de impuestos, por lo que el ganador del ticket accede”. Aquí es donde las autoridades tributarias y los organizadores de estos juegos deben poner un especial cuidado en la identificación y tal vez un posterior monitoreo de los ganadores de grandes premios para la detección de ilicitudes y conductas sospechosas.

En la consulta popular realizada en mayo del 2011, fue aprobada por la población la pregunta referente a la supresión de todo tipo de actividades relacionadas a juegos de azar y apuestas, de acuerdo a esta disposición, los casinos, salas de juego y afines estarán prohibidos en el territorio nacional, no obstante para que estos locales cesen sus actividades definitivamente deberá pasar algún tiempo y hasta que no se eliminen de manera permanente, persistirá la amenaza y oportunidad para los lavadores de utilizar este medio para sus fines. Si bien ya no existirán casinos y salas de apuestas el sistema de loterías, bingos y más sorteos persisten y pueden, si las autoridades no establecen una rigurosa vigilancia en estas actividades, convertirse en una técnica efectiva de lavado.

### **1.3.Sector aduanero, tributario**

*Este sector está conformado por depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios operadores, industriales y comerciales de zonas francas, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, intermediarios de tráfico*

*postal y envíos urgentes, empresas de mensajería, usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores, los demás auxiliares de la función aduanera y profesionales del cambio de divisas.*<sup>7</sup>

*En julio 13 de 1998 se expide la Ley Orgánica de Aduanas y se crea la Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE, como una persona jurídica de derecho público de duración indefinida, patrimonio del estado, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil. Se le atribuye las competencias técnico-administrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país. Se le entregan las facultades tributarias de determinación, resolución y sanción en materia aduanera, de conformidad con esta ley y sus reglamentos.*<sup>8</sup>

Pese a la existencia de organismos especializados para la regulación y control del sector aduanero y sus actividades, el riesgo en esta área es muy alto en lo que respecta a lavado de dinero, puesto que las operaciones ilegales que desde el extranjero se realizan, pasan inadvertidas por las autoridades aduaneras, y su control es incipiente, de acuerdo al informe presentado por la GAFISUD ( Grupo de acción financiera sudamericana) , el país carece de un sistema eficiente de declaración o revelación en el transporte transfronterizo de dinero efectivo y otros instrumentos negociables.

El artículo 5 de la Ley para reprimir el lavado de activos (2005) establecía que “*toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo*

---

<sup>7</sup> UIAF, Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 2007, Pág. 6 <http://200.2.12.198/nede/files/archivos/tipologias%20de%20lavado.pdf>

<sup>8</sup> <http://www.aduana.gov.ec/contenido/historia.html>

*por un monto igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, tiene la obligación de declararlos ante las autoridades aduaneras, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera.*

Un procedimiento que en la práctica reflejó varias fallas e inconsistencias, adicionalmente, la ejecución y control de esta obligación se le atribuía a la Corporación Aduanera Ecuatoriana, organismo que carece de experiencia en el manejo de dinero en frontera ya que su ámbito de aplicación son las relaciones jurídicas entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de mercancías. Igualmente, queda latente la duda dentro de la Corporación, en el caso de ser descubierto dinero sin declarar pues no existía ningún procedimiento de actuación y persistía la incertidumbre si tienen o no potestad para la intervención al no tratarse de mercancía.

En la entrada terrestre de Ecuador no se exigía la presentación del mencionado formulario y para la salida del país no se requiere declaración alguna. Igualmente, la norma habla únicamente de dinero en efectivo excluyendo otros instrumentos negociables al portador.

Con la reforma a la ley para reprimir el lavado de activos presentada en el 2010, se pretende corregir algunas faltas suscitadas, e incluyen al servicio de Rentas Internas y a la Policía Nacional como reguladores del control fronterizo no solo en terminales aéreos sino también en marítimos y terrestres.

Quedan algunos vacíos que merecen una especial atención en este sector, la mercancía que ingresa al país cumpliendo los requisitos de ley, es

objeto de ilícitos tributarios que son imperceptibles al ojo de las autoridades por su fachada de legalidad, pero existe toda una lista de tipologías relacionadas al lavado de dinero recogidas por la GAFISUD, que muestran la variedad de métodos utilizados para dar apariencia de legitimidad a fondos fraudulentos, que debe ser estudiada a profundidad por los expertos nacionales en el desarrollo de sus investigaciones y primordialmente para la prevención.

#### **1.4.Sector empresarial y micro empresarial**

De acuerdo a la ley de Compañías, existen 5 tipos de sociedades comerciales en el país: compañía en nombre colectivo; compañía en comandita simple y dividida por acciones; compañía de responsabilidad limitada; compañía anónima; compañía de economía mixta, además, se reconoce la compañía accidental o cuentas en participación.

La Superintendencia de Compañías, constituye el organismo estatal de control de las personas jurídicas constituidas bajo las disposiciones de la Ley de Compañías, este control guarda relación en todos los actos societarios, desde su constitución, aumentos de capital, fusiones, escisiones, disolución y liquidación de la persona jurídica. La Superintendencia está obligada a fiscalizar la integración del capital suscrito y pagado, sea este el aporte en efectivo y/o en especie, verificando documentadamente su propiedad y origen.

Quizás sea en la actualidad, el sector más frágil, pese a las regulaciones que en coordinación han establecido la Superintendencia de Compañías y otros

organismos de control con las distintas instituciones financieras, la inmersión de capitales ilegales es casi indetectable, si bien, no se distingue a ciencia cierta a las empresas que operan financiadas por organizaciones delictivas, las operaciones sospechosas que algunas de ellas reportan, han indicado varias de las formas como a través de sociedades legalmente constituidas y reconocidas inyectan capital, maquillando sus balances y justificando sus ingresos mediante reportes de exportación servicios a empresas extranjeras cumpliendo los requisitos de ley, para ingresar a manera de pago por el servicio el dinero a ser lavado con esta operación; de igual manera mediante la aparente exportación, de productos que por sus características es difícil determinar su valor real, se recibe dinero del extranjero como supuesto pago por esta exportación que generalmente es sub facturada o sobrefacturada para que se certifique el volumen de las transacciones efectuadas.

También, pequeñas empresas que no reportan una liquidez considerable, reciben el respaldo económico de una empresa extranjera para la realización de un proyecto específico en el país que aparentemente representa los beneficios sobre su inversión.

En este sentido la detección de actividades furtivas, es más difícil para las instituciones financieras puesto que se utiliza empresas legalmente constituidas y que cumplen con su objeto social, manejan volúmenes considerables de dinero y no operan mediante intermediarios que ofrezcan indicios sospechosos. En el otro extremo se dispone de pequeñas empresas o compañías económicamente inestables para inyectar capitales que ayuden a recuperar su solvencia y

posteriormente al fusionarse con el capital original, devolver a los inversores fondos legítimamente obtenidos.

## **1.5.Sector inmobiliario**

El considerable incremento de oferta y demanda en este sector, suscitado en los últimos años, sumado a las múltiples opciones de financiamiento, ha dado un giro significativo a un área que en la actualidad maneja sumas exorbitantes de dinero en el país. Condiciones como el costo de materiales de construcción, la plusvalía que generan ciertos inmuebles, el financiamiento de la construcción, la fuente de financiamiento de la compra, el vendedor y el comprador del inmueble, han llamado la atención a los lavadores de dinero como un medio más de inmersión de dinero furtivo.

Este sector ha sido materia de preocupación por parte de diversos organismos internacionales como el GAFI, el GAFISUD y la CICAD que lo incluyeron en sus tipologías y normativa como sector no financiero obligado a adoptar determinadas medidas de prevención para impedir su utilización con fines ilícitos en el lavado de activos.

Las empresas constructoras e inmobiliarias corren el riesgo de quedar involucradas en actividades de lavado de activos de forma directa o indirecta. Será directa si la empresa se encuentra a disposición de la organización criminal, por otro lado, será indirecta si el negocio es utilizado para el reciclaje de fondos ilícitos con desconocimiento de sus representantes o directivos. Este riesgo puede ser de carácter reputacional, legal y operativo siendo el primero de ellos el más delicado puesto que su materialización puede significar incluso, que



la empresa o negocio salga definitivamente del mercado. Para evitar estos riesgos, los negocios deben centrar su atención hacia dentro y hacia fuera del mismo, es decir, en sus trabajadores y sus clientes.

Son operaciones que pueden ser consideradas sospechosas: las compras sucesivas de bienes inmuebles y transferencia de estos a diferentes personas; incongruencia del capital que maneja el comprador del inmueble con el perfil económico que presenta; el representante o intermediario realiza operaciones sustanciales en efectivo a nombre de clientes o fideicomisos cuya actividad no concuerda con tales operaciones; compraventa de bienes muebles inmuebles a favor de menores de edad; la adquisición de bienes inmuebles por personas no residentes en el país; adquisición de inmuebles a bajo precio cuando su valor real es alto, o viceversa; aportes a fideicomisos inmobiliarios con participación de personas naturales que invierten cantidades que no guardan relación con sus ingresos económicos o con aportes de personas jurídicas no domiciliadas en el país o en las que participan empresas offshore.

En la reforma a la ley para reprimir el lavado de activos, no se establece algún control específico para este sector, pero una inclusión considerable que esta modificación otorga en el artículo innumerado a continuación del artículo tercero, indica: "... A más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis financiero (UAF) a través de la entrega de los reportes previstos en el artículo 3 de esta Ley, de acuerdo a la normativa que en cada caso se dicte: ... las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e

intermediación inmobiliaria y a la construcción;... Los sujetos obligados señalados en el inciso anterior deberán reportar las operaciones y transacciones económicas, cuyo valor sea igual o superior al previsto en el artículo 3 de esta Ley (\$ 10.000). Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas de conformidad con el reglamento que se emita para el efecto.”

Para muestra de esto, la Unidad de Análisis Financiero, en busca de una mejor administración de información que puede resultar trascendental para sus investigaciones, ha emitido una disposición dirigida a los notarios de todos los cantones a nivel nacional en la cual se establece que a partir del mes de septiembre del 2011 sean reportadas todas las transacciones inmobiliarias que asciendan a \$ 10.000 o más. Cada notaría enviara de manera mensual un reporte de todas las negocios sobre inmuebles que se incorporaran en sus protocolos, especificando datos de compradores, vendedores, cuantías y de ser el cas, observaciones adicionales, con el objeto de mantener un registro tangible de cada operación realizada y en el caso de verificarse algún indicio de lavado de dinero la Unidad pueda proceder con estos datos.

## **1.6.Sector Deportivo, el fútbol**

*Al igual que cualquier otra actividad comercial, los delincuentes pueden hacer uso del deporte para legitimizar las ganancias provenientes del delito o para perpetrar actividades ilegales en busca de renta financiera. A diferencia de otros negocios, no siempre el carácter redituable de la actividad en sí lo que*

*hace que el deporte resulte tan atractivo para los delincuentes. Las vinculaciones que los delincuentes buscan con el deporte no están únicamente motivadas por el deseo de ganar dinero. El prestigio social constituye otro factor de importancia. Los deportes populares pueden ser un medio para que los delincuentes se conviertan en ‘celebridades’ al asociarse con personas famosas y ascender a círculos de poder dentro de la sociedad en cuestión.*

*El mercado del fútbol profesional ha experimentado un significativo crecimiento debido a un proceso de comercialización iniciado en la década del '90. Las sumas de dinero invertidas en el fútbol crecieron principalmente como consecuencia del aumento en los derechos televisivos y del sponsoreo a nivel empresarial. Simultáneamente, el mercado laboral para los jugadores profesionales de fútbol experimentó un proceso de globalización inigualable, dado que una cantidad cada vez mayor de jugadores de fútbol fueron contratados por equipos fuera de su país de origen y los pagos por transferencias, que se producen en todo el mundo, alcanzaron niveles sorprendentes. Los flujos de dinero transfronterizos que se encuentran en juego pueden escapar en gran medida al control de organizaciones nacionales y supranacionales de fútbol, lo que abre oportunidades para el movimiento y lavado de dinero. Al mismo tiempo, sumas de dinero provenientes de inversionistas privados están ingresando a los clubes de fútbol para mantenerlos en funcionamiento, y pueden ofrecer a los inversionistas una rentabilidad a largo plazo en términos de derechos de difusión, venta de entradas, ganancias provenientes de venta de jugadores y de artículos promocionales.*

*El fútbol ha dejado de ser un deporte popular para convertirse en una industria global con un creciente impacto económico en los niveles superiores e importantes funciones sociales en los niveles más bajos. El fútbol puede servir no sólo como una fuente de ingresos para muchas personas, sino también como una herramienta para el desarrollo económico local, la cohesión social, la educación, la superación personal y la transmisión de valores humanos y culturales. En parte a raíz del crecimiento de la industria, el fútbol parece estar enfrentándose a diversas formas de delito y corrupción, entre las que se cuenta el lavado de dinero.*

*El fútbol profesional depende de cuatro fuentes principales de ingresos: ingresos producidos por partidos por día (contabilizados por medio de recibos emitidos a la entrada a las canchas y los boletos de entradas emitidos durante las cuatro estaciones), derechos televisivos, auspiciantes (impresión de marcas en remeras y publicidades de las mismas en los estadios), y demás ingresos provenientes de actividades comerciales (objetos promocionales bajo licencia, servicios de conferencias y de catering).<sup>9</sup>*

#### **1.6.1. Vulnerabilidades del sector**

- *El mercado es de fácil penetración: Esto se debe principalmente a las escasas barreras de ingreso al sector o a su inexistencia. Los fanáticos del fútbol de todas las áreas de la sociedad se congregan en el estadio de fútbol. Las convergencias entre funcionarios del gobierno y del sector*

---

<sup>9</sup> GAFISUD, Lavado De Dinero En El Sector Fútbol, 2009 , Págs. 8,9,10,16,17,18 (<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/63/60/44753131.pdf> )

*empresarial, así como entre el mundo de la legitimidad y del delito presentan oportunidades que propician la complicidad.*

- *Redes intrincadas de partes interesadas: El sector es complejo y se caracteriza por tener redes oscuras de interesados y una interdependencia entre los diferentes actores.*
- *Diversidad de estructuras jurídicas: Las estructuras jurídicas de los clubes de fútbol varían de ser sociedades de responsabilidad limitada que no cotizan en bolsa a fundaciones. A menudo, la administración de las actividades relacionadas con un estadio se realiza a través de distintas empresas. En algunos casos, los fondos de inversión de jugadores (reservas de talentos) gozan de personería jurídica independiente. La falta de reglamentación o control sobre las estructuras jurídicas así como la propiedad o el control de los clubes de fútbol arroja como resultado su carácter de fácil adquisición.*
- *Se encuentran en juego sumas considerables: el sector opera con considerables flujos de fondos e importantes intereses financieros. Muchas de las transacciones dentro del sector involucran enormes sumas de dinero, por ejemplo, en el mercado de transferencias. La competencia es dura, a nivel nacional e internacional, y el desempeño de un club en la cancha también determina su posición financiera. No es inusual que los clubes que cuentan con una gran proporción de sus*

*ingresos provenientes de las entradas a los estadios reciban casi todo esos ingresos en dinero en efectivo.*

- *Carácter irracional de las sumas involucradas e imprevisibilidad sobre resultados futuros: Los precios de jugadores pueden parecer irracionales y son difíciles de controlar. Lo mismo sucede con el descubrimiento y consecuente adiestramiento de jóvenes talentos. Se pueden hacer ganancias masivas pero incontrolables. Los países se hacen en todo el mundo, brindando amplias oportunidades para el lavado de dinero. Asimismo, el deporte se caracteriza esencialmente por tener un alto nivel de imprevisibilidad sobre resultados futuros.*
- *Necesidades financieras de los clubes de fútbol: A pesar del descomunal crecimiento de la industria en general, muchos de los clubes de fútbol están financieramente en malas condiciones y sus dificultades financieras podrían instar a las entidades a aceptar fondos de fuentes dudosas. La fragilidad financiera es en parte resultado del carácter del deporte. Los grandes clubes requieren enormes sumas para tener éxito y contar con la capacidad de comprar a los jugadores. La derrota de un club en un partido puede traer consecuencias financieras mayúsculas (una reducción en ingresos provenientes de auspiciantes, una disminución en derechos televisivos, el descenso a una división más baja). Las vulnerabilidades financieras pueden hacer de los clubes de fútbol un blanco fácil para el dinero mal habido.*

- *Vulnerabilidad social de algunos jugadores: (Éste es el caso concreto de los jugadores más jóvenes.) Si están mal asesorados, los jugadores podrían fácilmente ser objeto de negocios turbulentos. Esto podría facilitar la manipulación de algunos jugadores clave del mercado.*

*Las inversiones en clubes de fútbol constituyen una zona de riesgo para el lavado de dinero debido a la falta de transparencia acerca del origen del financiamiento. En efecto, las inversiones pueden ser poco claras y oscuras, lo que dificulta la verificación del origen de los fondos invertidos. De hecho, esta situación no difiere de cualquier adquisición de una compañía privada en el sector industrial o comercial. La defensa contra el lavado de dinero prevista en las recomendaciones del GAFI y en la legislación de los miembros del GAFI se basa en realidad en las medidas de debida diligencia del cliente que las instituciones financieras y profesiones no financieras aplicarían en este tipo de transacciones. No obstante, las sospechas respecto de la afluencia de dinero mal habido a través de estas inversiones “del estilo mecenazgo” son difíciles de probar. Si las inversiones privadas en clubes de fútbol se producen desde los niveles más bajos del fútbol amateur hasta los clubes más importantes del mundo, los objetivos son frecuentemente clubes que atraviesan dificultades financieras en busca de sponsors “salvavidas”.*

*Cuando ocurre el lavado de dinero en el sector de las transferencias de jugadores los representantes futbolísticos suelen estar en el centro de estas operaciones ilegales. En un entorno legal cada vez más complejo, los jugadores (pero también los clubes deportivos) solicitan cada vez más los servicios de*

*representantes para negociar y firmar contratos. El mercado internacional de transferencias está integrado por más de 4.000 representantes futbolísticos inscriptos oficialmente en la FIFA. No existen limitaciones a la función de los representantes: manejan a sus jugadores, pero también podrían estar administrando los fondos de sus clientes (consultoría en administración de bienes), proporcionando asesoramiento impositivo (consultor impositivo), ofreciendo un contrato de imagen o haciéndose cargo de su publicidad (agentes publicitarios). Su posición es crítica porque con frecuencia deciden si se produce o no una transferencia (por medio de su influencia sobre un jugador y su relación con un club determinado).*

*Existen normas que regulan esta actividad, aunque algunos países son más rigurosos que otros en su aplicación. Por ejemplo, para combatir la falta de transparencia del sector de representantes futbolísticos, la FIFA, en tanto entidad privada, ha fijado estrictos lineamientos para los representantes de los jugadores. De acuerdo con estas nuevas reglamentaciones, que constituyen leyes privadas, los representantes de los jugadores deben respetar y ceñirse a las reglamentaciones, directivas y decisiones emitidas por las autoridades competentes de la FIFA, las federaciones y las asociaciones, al igual que a las leyes que rigen la colocación de empleo aplicables en el territorio de la asociación.*

*No obstante, muchos representantes todavía operan sin licencia, (los jugadores también pueden elegir como representantes, por ejemplo, a familiares cercanos o abogados) y por lo tanto no son controlados por la FIFA u otra asociación*



*futbolística a nivel nacional o continental. Los representantes (con o sin licencia) integran una comunidad cerrada, lo cual dificulta identificar las transacciones que ellos realizan. Por este motivo, la existencia de normas más estrictas formuladas por la FIFA no puede impedir el lavado de dinero u otras actividades irregulares por completo.*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibíd*em, Págs. 16,17,18

## **CAPITULO 2**

### **Medios probatorios frecuentemente utilizados en los procesos judiciales nacionales**

El objeto principal de los medios probatorios en el proceso penal radica en la comprobación inequívoca de la existencia del hecho tipificado como delito y la responsabilidad, en los distintos grados de participación que pueda tener el sujeto a quien se imputa. Motivo por el cual, la carga probatoria debe ser minuciosamente elaborada para que, como indica el código de procedimiento penal ecuatoriano, el momento de ser producidas en el juicio, ante el tribunal de garantías penales correspondiente, otorguen a los juzgadores, los elementos de convicción que fundamenten sus decisiones y estas se reflejen en una sentencia justa. Nuestro código a su vez puntualiza que toda acción pre procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna, por lo que todas las pruebas deben obtenerse de acuerdo a los procedimientos legales sin quebrantar ningún derecho.

La legislación nacional reconoce pruebas de tres clases: material, documental y testimonial, entendiendo a la primera como aquella que consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que se la cometió, todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser presentado en la etapa del juicio y valorado por los tribunales de garantías penales (Art. 91 CPP); la prueba testimonial se funda en las declaraciones de personas, recibidas en el transcurso del proceso, acerca de lo que pudieron conocer, por la percepción de sus sentidos, sobre lo que se investiga, con el fin de apoyar la reconstrucción conceptual de los hechos. Se clasifica en testimonio propio, testimonio del ofendido y testimonio del imputado. Finalmente la

prueba documental hace referencia a los documentos públicos y privados que igualmente deben ser incorporados legalmente en la audiencia del juicio.

Una cuestión importante en lo que respecta a la recopilación de medios probatorios específicamente para el delito de lavado de activos a tomar en cuenta, es que, el autor del delito previo, el que generó el dinero ilícito, puede como no ser autor del crimen de blanqueo de dinero y, por consiguiente al tratarse de un delito autónomo del precedente, puede deducirse a partir de pruebas circunstanciales e indiciarias que hay un presunto lavado y que los fondos proceden de actividades ilegales sin que se necesite su acreditación previa.

En materia de lavado de activos, las pruebas más usadas se asientan principalmente en indicios y reportes de operaciones inusuales o sospechosas, ya que como se indicó anteriormente, no es necesario un pre juzgamiento del delito principal para la investigación y juzgamiento del blanqueo de capitales, con este antecedente, de igual manera los medios probatorios adquieren su autonomía de la infracción previa, y se encauzarán a la comprobación de que las actividades dudosas que se desarrollan en los distintos sectores vulnerables responden a inmersión ilegal de dinero.

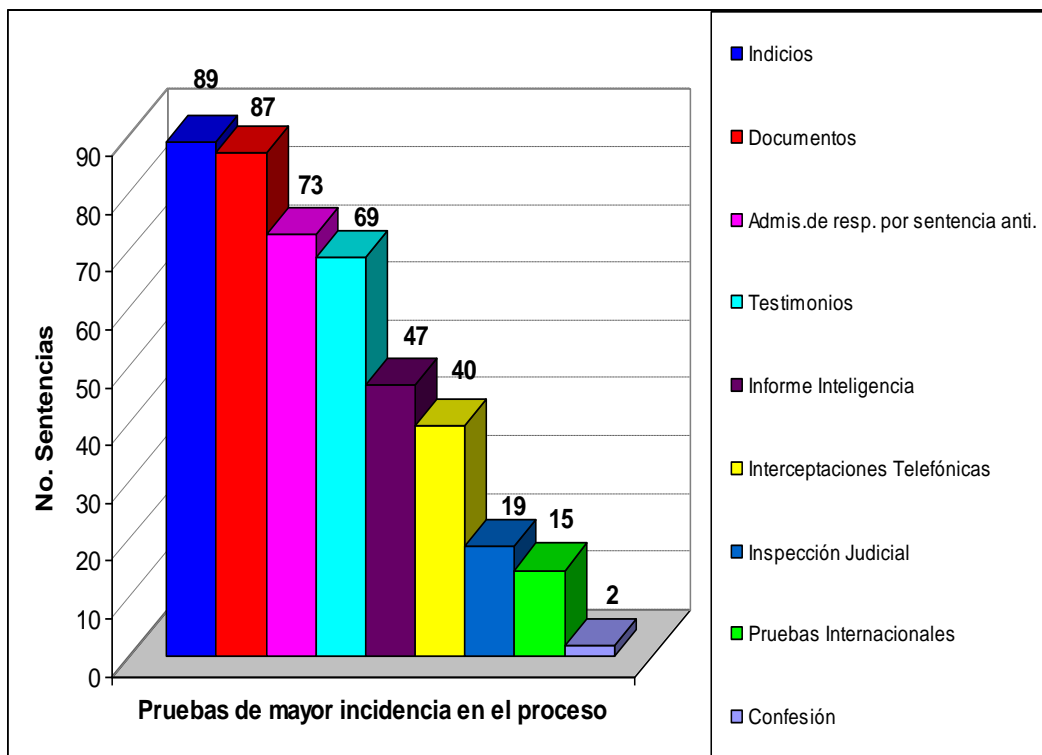
*En el blanqueo de dinero, y especialmente el cometido en el seno de una organización, el aspecto probatorio es, en definitiva, el más relevante y dificultoso. Lo normal será la inexistencia de prueba directa y ello dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con el que actúan las organizaciones criminales, por lo que la prueba indirecta será lo usual.*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Delgado García, Dolores, “ La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos -Perspectiva del Fiscal-“, **Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas**, España, Septiembre 2006, pág. 5

## Cuadro 1.

Fuente: Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas



El cuadro 1. , elaborado por la oficina de la ONU contra la droga y el delito dentro del programa “Asistencia legal para América Latina y el Caribe”, describe, según un estudio realizado, cuales son las pruebas de mayor incidencia para el juzgamiento del delito de blanqueo de capitales, siendo la prueba indiciaria seguida de la documental, las mayormente actuadas y las que otorgan un significativo volumen de elementos de convicción a los juzgadores en los procesos condenatorios. De aquí tomaremos las más relevantes para hacer un breve estudio.

### 2.1 La prueba indiciaria del origen ilícito de los bienes.

Si la finalidad del derecho penal es proteger bienes jurídicos respetando las garantías constitucionales y esencialmente el debido proceso, no encontraríamos reparo alguno en argumentar a favor de la autonomía del delito de lavado de activos en los supuestos en que el delito previo se comprueba a partir de indicios que permitan afirmar, conforme a las reglas de la sana crítica, que el dinero o los activos que se hallan secuestrado provienen de un delito.

La Convención de Viena prescribe en el Art. 3.3 que “el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualquiera de los delitos enunciados, podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso”. Por otro lado el Reglamento Modelo de la CICAD, (Art. 2.5) dice que “el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de los delitos de lavado de activos podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso”

*Estos principios que son utilizados para valorar las pruebas en materia criminal y estos conceptos referidos a la valoración del elemento subjetivo del tipo deberían ser usados para ponderar el origen ilícito de los bienes en el delito de lavado y el conocimiento del origen por parte del autor.*<sup>12</sup>

Se puede formar la convicción judicial, en un proceso penal, sobre la base de la prueba indiciaria. Existe una doctrina consolidada sobre los requisitos, formales y materiales, para la validez de la prueba indirecta. Desde el punto de vista formal: Primero: Que la sentencia exprese cuáles son los hechos, base o indicios que se

---

<sup>12</sup> PINTO Ricardo/ CHEVALIER Ophelie, “El delito de lavado de activos como delito autónomo. Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria”. Editado y aprobado por el Dr. Rafael Franzini , © CICAD OEA, pág. 54

consideran acreditados y que sirven de fundamento a la deducción o inferencia. Segundo: Que la sentencia dé cuenta del razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicación que, aún cuando pueda ser sucinta o escueta, es necesaria en el caso de la prueba indiciaria, para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia. Desde el punto de vista material los requisitos se refieren, en primer lugar, a los indicios y, en segundo, a la deducción o inferencia.

*En cuanto a la inducción es necesario que sea razonable, no arbitraria, absurda o infundada y que responda a las reglas de la lógica y la experiencia, de manera que, de los hechos base, fluya como conclusión natural el dato a acreditar.*

*Cuando la sentencia basa la condena en la prueba indiciaria, deberá constatar el cumplimiento de esos requisitos, formales y materiales. En relación al control de la racionalidad de la inferencia, no se puede sustituir el criterio valorativo del juzgador, en el sentido de que otorgue peso a unos indicios incriminatorios en relación con la prueba de descargo, es decir, la ponderación de los elementos de la inculpación y de descargo, debe ser respetada, pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora del a quo.<sup>13</sup>*

Respecto a los indicios: es preciso puntualizar los requerimientos del código de procedimiento penal ecuatoriano para que de estos se pueda presumir el nexo causal entre la infracción y sus responsables, es necesario:

---

<sup>13</sup> Dolores Delgado, La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos -Perspectiva del Fiscal, Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, España, Septiembre 2006, pág. 6

1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho; es decir que sea tipificada, en este caso nuestra legislación sanciona la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de delitos, o constituyan instrumentos de ellos. (Ley Reformativa de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos, Art 1, Literal Primero). En la prueba indiciaria se verifican indicios tangibles con lo que se evidencia la materialidad de la infracción, son parte básica del delito, en estos se manifiesta una conducta dada, está encuadrada dentro de la causalidad o la relación causa efecto, siendo perfectamente distinguibles.

2.- Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones; en el caso específico del blanqueo de capitales, estos hechos se sustentarán en los reportes de operaciones sospechosas emitidos por instituciones financieras y de control las cuales basadas en movimientos y transacciones inusuales aportan signos de alerta para el inicio de indagaciones por este delito.

3.- Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean:

a) Varios; por su poder acreditativo al momento del juzgamiento, si bien la legislación nacional no fija cuantos indicios se requiere para obtener una sentencia condenatoria o la imputación a un sospechoso, se deduce que se necesita más de uno, mientras más indicios existan menos puede ser grado de error.

b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; deben

concatenarse en relación punto central del delito, es decir a la existencia de un origen ilícito del capital, y la responsabilidad del imputado que, con conocimiento de su procedencia, desarrolle un mecanismo conversión del dinero.

*Jorge Zavala Baquerizo señala: “La falta de relación del hecho con el objeto del proceso no le permite al primero constituirse en indicio desde el punto de vista procesal”. La relación no puede ser hipotética, incierta, imaginaria, arbitraria (Manzini); como tampoco puede ser consecuencia de la causalidad”.*<sup>14</sup>

c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola conclusión; fundamentalmente se encausaría en comprobar la pretensión de dar apariencia legal a dinero obtenido ilícitamente.

d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente; únicamente cuando se exhibe esta característica se puede demostrar que las conjeturas son diversas, relacionadas con la esencia del proceso, es cuando verdaderamente constituyen indicios para ser valorados, cuando carecen de estas particularidades son meramente hechos intrascendentes.

Por todo lo expuesto, podemos concluir que principalmente son dos las cuestiones para analizar la prueba indiciaria, por una parte, la verificación del origen delictivo de los bienes y, el conocimiento por parte del lavador de su origen ilícito, entre los indicios más determinantes se pueden citar: los inusuales incrementos del

---

<sup>14</sup> Zavala Baquerizo Jorge, “El Proceso Penal”, Editorial **EDINO Jurídico**, Bogotá Colombia, 1989. Pág. 119



patrimonio o manejo de sumas de dinero en efectivo sumamente elevadas, la insólita aparición de negocios lícitos que evidencian una liquidez sospechosa, o el incremento de capital de pequeñas empresas de manera repentina, adquisición de muebles o inmuebles sin planes de financiamiento, entre otros.

Adicionalmente es importante resaltar algo que la fiscal española Dolores Delgado manifiesta en su escrito "La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos-Perspectiva del Fiscal", *"uno de los aspectos que más pueden incidir en materia de blanqueo es el de la valoración que el juzgador realice del contra indicio y del silencio del acusado. Hace referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo Español de 26 de junio de 2003 que expone: "Es cierto que el silencio del acusado o la falta de veracidad de su versión exculpatoria no son por sí solos suficiente prueba de cargo, de modo que no puede considerarse enervada la presunción de inocencia si no se dispone de otros elementos probatorios. Pero también ha de tenerse en cuenta que la aportación por parte de la acusación de pruebas suficientemente serias sobre los hechos pueden requerir del acusado una explicación que debería estar en condiciones de suministrar al Tribunal, de manera que la ausencia de tal explicación, o una versión de los hechos claramente inverosímil, pueden ser valoradas como un indicio más de carácter complementario para afirmar su culpabilidad"*.

## **2.2 La prueba testimonial**

Para Heliodoro Fierro-Méndez "es el medio de prueba mediante el cual una persona hace ante el funcionario judicial, un relato libre y mediato de hechos relacionados con la investigación del delito, o de los hechos o antecedentes coetáneos o subsiguientes a los acontecimientos delictivos, es una manifestación del

pensamiento, no una declaración de voluntad por medio de él quiere el testigo representar algo que ha existido, o que todavía existe, no modificar lo que existe.

Únicamente pueden ser llamados como testigos las personas físicas quienes a su vez pueden ser:

- Personas físicas que de forma directa y personal hayan tenido la ocasión de observar o percibir el suceso objeto de prueba.
- El servidor público de policía judicial puede ser citado al juicio oral para rendir testimonio con respecto al caso, pudiendo consultar su informe y notas respectivas al mismo, como recurso para recordar siempre y cuando el juez lo autorice hacerlo.
- El acusado y el coacusado cuando ofrezcan hacerlo en su propio juicio.”

En Ecuador se reconocen tres tipos de testimonios, el propio, el del ofendido y del imputado, estos se reciben por regla general en la etapa del juicio ante el tribunal de garantías penales, pero excepcionalmente pueden ser recibidos durante la instrucción fiscal por los jueces de garantías penales.

Tienen la potestad de no declarar, los parientes del acusado comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho. Tampoco se recibirá el testimonio de las personas depositarias de un secreto en razón de su profesión, oficio o función, si la declaración versa sobre la materia del secreto. En caso de haber sido convocados, deben comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el secreto y abstenerse de declarar. (CPP Art.126).

En este sentido, entra en juego una controversia muy grande, al referirnos específicamente al delito materia de esta investigación, puesto que pese a la

prohibición de testificar en razón de profesión u oficio, al tratarse de un delito que basa detección, en señales de alerta conferidas por personas e instituciones que perciben indicios de actividades furtivas, sería un deber social para aquellos profesionales que estén al tanto de operaciones relacionadas con el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo o otros delitos, informar a las autoridades para prevenir la integración de estos capitales al curso normal económico o en el caso de haberse consumado el ilícito, iniciar los respectivos procesos judiciales y sancionar a los responsables. Caso contrario, podrían verse involucrados en la comisión del delito como cómplices o encubridores del mismo. Tal es el caso hipotético del contador que detecta una irregularidad en el balance anual de la compañía a su cargo, en el cual se reportan actividades que no guardan relación con el objeto social de la empresa y por ellas ingresa una suma considerable de dinero, o un abogado que es contratado para realizar la adquisición de varios inmuebles por un cliente que insólitamente maneja un gran volumen de efectivo. ¿Deben denunciarse este tipo de actos? ¿O el secreto profesional está por encima del orden público y la seguridad económica nacional? Es una cuestión a tomar en cuenta por los legisladores, en su tarea por el perfeccionamiento del tratamiento del delito de lavado de activos en el país.

Retomando las clases de testimonios, tomaré la clasificación que el autor colombiano Heliodoro Fierro-Méndez expone, según la relación del testigo con el hecho:

- a) “Testimonio propio: es el rendido por un tercero que no es parte del proceso ni ofendido por la infracción.

El testimonio propio no tiene valor como prueba de culpabilidad, si de las demás pruebas no aparece demostrada la existencia de la infracción.

- b) Testimonio del ofendido: como su nombre lo indica es la declaración testimonial que rinde la persona que se considera ofendida con la conducta punible.

La declaración del ofendido por sí sola, no constituye prueba.

- c) Testimonio del acusado: es la declaración testimonial que rinde la persona que se considera el ofensor con la conducta punible.
- d) Testigo sospechoso: es el declarante variante en su declaración o discordante consigo mismo; que usa respuestas evasivas, que en su declaración vacila de un modo equívoco, siempre y cuando estas circunstancias no procedan de la rusticidad o torpeza del testigo.

En el caso específico del delito tratado, los testimonios propios se verifican, dependiendo del sector en el que se haya detectado la actividad sospechosa, usualmente de empleados de instituciones financieras; los operadores de casas de valores; auditores de las entidades de control; empleados de los casinos, policía de migración etc. Su testimonio contendrá, de la manera más detallada, cada uno de los incidentes, acciones, omisiones, conversaciones, y demás minuciosidades que hayan colaborado a la detección de anacronismos en los movimientos estructurados por el presunto lavador. Adicionalmente los declarantes pueden otorgar información acerca de la relación del imputado con el autor o autores del delito que dio origen a las ganancias ilícitas, indicando su vinculación con estos y facilitando

su ubicación, de este modo en algunos casos a nivel internacional, ha logrado juzgarse tanto al lavador como al reo del ilícito previo.

El testimonio del testigo sospechoso carecerá de legitimidad cuando el tribunal así lo considere por carecer de congruencia, y será desestimado al considerarse inválido para el proceso, el código de procedimiento penal faculta al presidente del Tribunal para ordenar la detención, por faltar a la verdad.

El testimonio del acusado, es un tema al que el juzgador debe conferirle un especial cuidado puesto que, al ser voluntario, las preguntas que se le formulen deben ser directas acerca de la infracción e indirectas respecto del acusado y, en ningún caso, capciosas, sugestivas o que tiendan a incriminarle.(Art. 295 CPP)

Por otra parte, debe tomar en consideración una cuestión común en este tipo de procesos, en relación a este testimonio, ya que el acusado generalmente toma uno de estas direcciones; puede mantener la postura del origen lícito del dinero por el cual está siendo investigado, o asume el desconocimiento de la naturaleza delictiva del capital manejado.

## **2.3 La prueba documental**

Para nuestro código de procedimiento penal la prueba documental se constituye por documentos públicos y privados, la valoración de este tipo de prueba se hará por la calidad de los mismos, así como por su relación con el conjunto de las demás pruebas que obren en el proceso. Permite la intervención pericial en el caso de que los documentos sean impugnados, y para pre cautelar los derechos del imputado, el reconocimiento de documentos o su firma en ellos no será forzado, admitiéndose solo en caso de que sea voluntario.

*“Un documento público es el otorgado por un servidor público o con su intervención, y en ejercicio de su cargo. Para que un documento ostente la condición de público es menester no solamente que quien lo expida o intervenga en su producción tenga la calidad de servidor público de cualquier naturaleza, sino que en el acto de creación del documento actúe en tal condición, pero, además que este en ese instante, esté ejerciéndolo. Si no es así no puede tenerse como documento público”, señala Heliodoro Fierro-Méndez.*

Constituyen documentos públicos en Ecuador, las certificaciones emitidas por los notarios, las distintas instituciones públicas como el SRI, Ministerios, Superintendencias, Municipios, Embajadas, Registradores mercantiles, Registradores de la propiedad, y demás que las leyes nacionales admitan como tales.

*El documento privado es el documento que se hace en la esfera privada: la carta y el contrato, por ejemplo. En esta esfera rige el principio de la autonomía de la voluntad, se puede hacer todo lo que se quiera mientras no se violente la ley, por lo que en lo que respecta a documentos privados siempre que sean reconocidos por las personas que los firman tendrán validez legal, independientemente del soporte en que se otorguen.*<sup>15</sup>

Retomando a Heliodoro Fierro- Méndez, la autenticidad e identificación del documento se demuestra o prueba por métodos como el reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, filmado o producido; reconocimiento de la parte contra la cual se aduce; mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales de personas naturales o jurídicas; mediante informe de experto en la respectiva disciplina.

---

<sup>15</sup> Jiménez Monge Ana Lucía, “El valor legal y probatorio de los documentos en diferentes soportes”, [http://www.archivonacional.go.cr/pdf/valor\\_legal\\_probatorio\\_doc.pdf](http://www.archivonacional.go.cr/pdf/valor_legal_probatorio_doc.pdf)

*El documento privado es auténtico si se ha reconocido ante juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; cuando fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente; cuando se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior.*

*Los documentos públicos prueban la certeza de su otorgamiento, fecha de realización y las declaraciones que el servidor público haga en él. Ahora si se trata de una escritura pública, el alcance probatorio del contenido, solo se extiende a lo que las partes entre sí hayan expresado; y con respecto a terceros, no hace prueba lo que en el documento no conste, salvo que este tercero haya tenido conocimiento de un contenido simulado y o de uno distinto o más allá de lo escriturado.*

*Los documentos privados auténticos tienen el mismo valor probatorio que los documentos públicos, tanto entre quienes lo firmaron o crearon y sus causahabientes, como respecto de terceros.*

*Los documentos que se aporten al proceso penal deben serlo en original, no obstante la ley procesal penal permite que lo sean en copia auténtica. Y en caso de no ser posible, se reconocen por el medio de prueba conocido como la inspección judicial.*

*La copia puede consistir en una transcripción o en una reproducción mecánica o fotostática del documento.*

*Los documentos escritos deben ser leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes en la audiencia de juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido.*

Los siguientes documentos son aquellos frecuentemente utilizados en la investigación del delito de lavado y conexos:

- Documentos de identificación: cédulas de ciudadanía, registros civiles o eclesiásticos de nacimiento o del estado civil, tarjetas militares, pasaportes, visas o registros migratorios, licencias de conducir autos o naves aéreas o acuáticas, tarjetas de identificación de empleos particulares u oficiales, etc., con los cuales se puede demostrar parentesco o relación entre imputados o sospechosos, o bien para la necesaria identificación plena de personas implicadas.
- De pago: Cheques, letras de cambio, recibos de consignación de dinero, recibos de transacciones de dinero a través de cajeros automáticos, pagarés, tarjetas de crédito, tarjetas débito, cheques de viajero, giros postales (Money Order), dinero efectivo en moneda nacional o extranjera, recibos de depósito a término fijo, cupones o desprendibles de cheques, etc., que pueden ser útiles tanto para probar la capacidad patrimonial de las personas, como para establecer si hay o no relaciones entre ellas.
- De propiedad: Escrituras de compraventa, facturas, recibos de abonos por pagos a crédito, hipotecas, licencias de importación o exportación, manifiestos de aduana, testamentos, sentencias de sucesión, etc.
- Contratos: Laborales, de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, de compraventa de bienes muebles o inmuebles, de constitución o reforma de sociedades, contratos de comodato, contratos de mutuo, etc.
- Certificados: De registro inmobiliario, automotor y de naves aéreas o acuáticas; de Cámaras de Comercio, de Oficinas de Impuestos locales o



nacionales (declaraciones de renta o pagos de impuestos), académicos (expediciones de títulos o certificados de escolaridad), de membrecía de clubes, etc., que pueden servir para complementar, corroborar o desvirtuar pruebas de propiedad e incluso de alguna condición especial de alguna de las personas imputadas o sospechosas de haber incurrido en alguna actividad ilícita.

- Soportes informáticos: Discos duros de computadoras, discos blandos (diskettes), discos compactos, discos de compactación de información (Zip), discos ópticos, impresoras, agendas digitales y electrónicas de toda especie, teléfonos celulares, cassettes de audio y video, discos de DVD, cámaras digitales y dispositivos de memoria paralela, los cuales, como se dijo en la exposición sobre el aseguramiento de las pruebas, es importante inspeccionar detalladamente con todas las seguridades, para recuperar la información, que puede estar relacionada con lavado de activos u otra actividad delictiva.
- Escritos o imágenes impresas: Manuscritos, libros de contabilidad y de comercio en general, fotografías y álbumes fotográficos, agendas de papel, libros que contienen anotaciones manuscritas o dedicatorias, cuadros, recetas médicas, recibos de pagos de peajes, tarjetas de invitación o de presentación personal, tiquetes aéreos o de otra especie, cupones de pases para abordar vuelos, marcas de mercancía (con mayor razón si son las marcas que a veces les ponen los narcotraficantes a los envíos de drogas, aunque a veces lo hagan para distraer a las autoridades), poderes conferidos a abogados, copias de procesos judiciales.

Aunque no constituya propiamente un documento, un pedazo de papel con unas características determinadas en un momento dado puede llegar a constituir

prueba de la culpabilidad o inocencia de una persona a quien se imputa una infracción. <sup>16</sup>Con respecto a los documentos electrónicos, entendidos como una reproducción de manifestaciones de voluntad del ser humano plasmadas en soportes magnéticos, o almacenadas en la memoria de un computador; consistentes en mensajes digitales que a través de distintos componentes de hardware exteriorizan su contenido para ser comprendido por el usuario.

Nuestra legislación señala que correspondencia epistolar, telegráfica, telefónica, cablegráfica, por télex o por cualquier otro medio de comunicación, es inviolable. No obstante con una orden judicial, se puede retener, abrir, interceptar y examinar, cuando haya suficiente evidencia para presumir que tal correspondencia tiene alguna relación con el delito que se investiga o con la participación del sospechoso o del imputado (Art.150).

Se considera que un mensaje de datos , sus anexos y remitidos, son accesibles para consulta posterior cuando se puede recuperar su contenido en forma íntegra en cualquier momento, empleando los mecanismos y procedimientos previstos para el efecto, los cuales deberán detallarse y proporcionarse independientemente del mensaje de datos, a fin de garantizar el posterior acceso al mismo.

Cumplidos los requisitos de accesibilidad, el mensaje de datos tiene iguales efectos jurídicos que los documentos que constan por escrito.

En lo que respecta a grabación de conversaciones telefónicas o filmaciones, se las otorga el carácter de documentos privados que deben someterse al análisis del

---

<sup>16</sup> Rincón Cuéllar Herman, “ Los diferentes medios de prueba documental en el proceso penal”, **CICAD/OEA**, La Antigua Guatemala, Guatemala, 2001., Pág. 7

juzgador quien en conjunto con el resto de material probatorio, determinará en primer lugar la autenticidad de estas grabaciones, la forma de inserción de las mismas al proceso, tomando en cuenta que para su obtención no se hayan vulnerado garantías constitucionales ni del debido proceso. En este punto surge la controversia a cerca de cuando se puede considerar ilícita esta prueba, Fierro-Méndez arguye que la prueba solo es ilícita cuando, sin orden de autoridad competente, se interceptan las comunicaciones postales, telefónicas, etc. De personas distintas a las que intervienen en la comunicación, esto es al remitente y al destinatario. Pero habría que analizar en el caso del delito particular que analizamos, si podrán considerarse lícitas o no las reproducciones de grabaciones telefónicas en las que se verifican llamadas realizadas por los presuntos lavadores a miembros de organizaciones delictivas, o la exposición de videos de cámaras de seguridad de bancos que revelen la presencia de los imputados en el establecimiento, etc. Dado el caso el juez deberá apreciar si la prueba es pertinente y si su producción es trascendente en la determinación de responsabilidades dentro del proceso.

Me permito citar a manera de ejemplo, un fragmento importante de la Sentencia del Tribunal Supremo Español de 26 de junio de 2001, que hace referencia la fiscal Dolores Delgado, en su documento mencionado anteriormente. *Analiza el Tribunal la validez de unas intervenciones telefónicas, las cuales la defensa alegó en el recurso impugnatorio que la solicitud de intervención telefónica se refería a la investigación de una banda de personas que se dedicaban al narcotráfico, sin embargo lo averiguado a través de dicha intervención fue la existencia de un delito distinto, como es el blanqueo de dinero, sin que se hubiese pedido en su momento la ampliación del mandamiento a la investigación de ese nuevo delito, lo que supondría la quiebra del principio de*

*especialidad y la vulneración de la doctrina del “hallazgo casual”, importante reflexión que otorga al juzgador el deber de considerar las pruebas, no tradicionales en la investigación de delitos que con el avance de la tecnología cada vez son más difíciles de descubrir.*

## **1. La prueba pericial**

Es el medio de prueba que parte del conocimiento que brinda una ciencia o técnica o arte necesario para comprender de manera correcta un hecho. Este medio de prueba requiere la participación de un perito.

*Por perito entendemos al sujeto que por medio de sus conocimientos especializados suministra a los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia la forma y medios de interpretación y apreciación de los hechos que le son sometidos a su pericia.*

*La prueba pericial es oportuna cuando se requiere precisamente del dominio y conocimiento de una rama del saber, cuando sea necesario un experto que dados sus conocimientos pueda comprender y explicar una situación de manera correcta.<sup>17</sup>*

Esta prueba es esencial dentro de un proceso penal, ya que contribuye con datos objetivos de un profesional experto ajeno al proceso. Para garantizar la eficacia de este medio deben considerarse algunos aspectos como:

- a) La competencia de los peritos, es decir profesionales especializados en diferentes materias y que hayan sido acreditados como tales por el órgano

---

<sup>17</sup> Estrada Ortiz Omar, “Derecho Procesal Penal II. Medios de prueba, La Prueba Pericial”. <http://endoko.com/wp-content/uploads/2010/12/PRUEBA-PERICIAL-Y-PROCESO-PENAL.pdf>

competente, en Ecuador, la Fiscalía General del Estado. Se requiere nombramiento y posesionamiento para que surja la facultad de aplicar los conocimientos que ostenta.

- a) Al tratarse de un individuo externo al proceso, se refuerza su imparcialidad través de juramento. Su actividad es extraprocesal, pero con el objeto de aportar al proceso, se lleva a cabo durante la investigación del delito, en diligencias previas o posteriores complementarias.
- b) Se certifica la publicidad del nombramiento del profesional a través la notificación a las partes de los nombres de quienes practicarán la pericia.
- c) El dictamen debe versar sobre hechos, no sobre cuestiones jurídicas.

Nuestro Código de Procedimiento Penal indica en su Art. 95: Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, el Fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias correspondientes. Para el efecto, el Fiscal designará el número de peritos que crea necesario. El imputado o acusado, podrá designar un perito, mediante petición al Fiscal, sin que por tal motivo se retarde la práctica del reconocimiento. Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos habilitados, el Fiscal nombrará a personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, que tengan conocimientos en la materia sobre la que deban informar.

Los peritos están obligados a comparecer a posesionarse y a informar, en los plazos señalados por el Fiscal.

Dentro del sistema penal acusatorio, como lo señala acertadamente la autora mexicana Ana Romero Guerra, si el perito no rinde declaración en el juicio, no hay prueba pericial. Por lo que los informes periciales deberán ser ratificados en su

totalidad por sus autores en la audiencia ante el tribunal, y podrán ser sometidos a los pertinentes interrogatorios que las partes procesales necesiten.

El informe pericial por escrito, contendrá: (Art. 98 CPP):

1. La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen;
2. El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del delito, en cuanto fuere posible;
3. La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento;
4. El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia;
5. Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado par, llegar a ellas y los motivos en que se fundamentan;
6. La fecha del informe; y,
7. La firma y rúbrica del perito.

Particularmente, en el delito analizado, las pericias más frecuentes son: la fotografía técnica forense, en los casos en que exista evidencia física que pueda ser fotografiada, como la de equipaje lleno de dinero incautado en los aeropuertos, en estas se verificará la autenticidad de las imágenes ; huellas dactilares, para identificación de sospechosos; pruebas de caligrafía en documentos públicos y privados presuntamente falsificados; videograbación con cámaras ocultas selladas, obtenidas en colaboración con instituciones reportantes de actividades sospechosas de sus clientes; audio grabación y verificación de voz, solicitadas en la investigación a operadoras telefónicas, con autorización judicial, para rastreo de implicados y obtención de

información; rastreo de información en la memoria y archivos de las computadoras, se pueden obtener documentos electrónicos manipulados, o verificar transacciones realizadas por este medio o recuperar de datos “borrados” en el disco duro de computadores; auditorías forenses, que evidencien la manipulación de estados financieros, balances, transacciones, ilegítimas en empresas, instituciones financieras y crediticias, casas de valores, etc. entre otras.

### **CAPITULO III**

#### **El caso de Hernán Prada, análisis y verificación de la eficacia de los medios probatorios empleados**

La dolarización en el Ecuador, a criterio de los expertos económicos, marcó el punto de partida de las actividades de lavado de dinero en el país, es de conocimiento popular que narcotraficantes en especial, colombianos, invierten, sin problema alguno, los réditos de sus actividades ilícitas, en nuestra nación ya que el frágil sistema de investigación, no logra concretar sus objetivos, siendo testimonio de esto, que del total

de instrucciones fiscales iniciadas, desde su tipificación como delito autónomo en el 2005 hasta la presente fecha solo existe una que concluyó con sentencia condenatoria en todo el país. La mayoría de investigaciones realizadas no se concretan por falta de pruebas; si bien la como la experiencia internacional nos indica, los hallazgos en este tema emanan principalmente de indicios, es necesario contar con todo tipo de elementos que complementen esta sospecha, mecanismos que en Ecuador se está empezando a descubrir como producto del llamado de atención que obtuvo el país por el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo que en el 2010, presento un informe catalogándonos como una nación que constituye un riesgo para el sistema financiero internacional, por no haberse comprometido con su plan de acción e incumplir con los estándares internacionales para el combate del lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo. A partir de esto, se reforma la Ley para Reprimir el Lavado de Activos; la Unidad de Inteligencia Financiera cambia su nombre a Unidad de Análisis Financiero; se dispone el fortalecimiento del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos; son emitidas resoluciones que establecen una serie de parámetros a ser ejecutados por las entidades del sistema financiero con el objeto de vigilar el movimiento de fondos, esencialmente de transacciones que superen los 10.000 dólares<sup>18</sup>; entre otras medidas, que se esperan fortalezcan el sistema investigativo y posterior juzgamiento de este acto típico en el país.

Me permito indagar un poco en los antecedentes de la tipificación del lavado de activos como delitos autónomo, ya que hasta antes del 2005, era considerado como un delito conexo al narcotráfico, y por ende era la Ley de Sustancias Estupefacientes y

---

<sup>18</sup> Resolución No jb-2010-1767, 21 junio de 2010; Resolución No. Jb-2010-1683, 9 de junio de 2010.



Sicotrópicas que en su ámbito de aplicación incluía el lavado de activos y actividades vinculadas, siendo requisito imprescindible para su juzgamiento, la prejudicialidad, requiriéndose una sentencia que haya sancionado el narcotráfico u otro delito similar, para que por mérito de esta se establezca el efectivo origen injustificado de los fondos.

Si bien, gracias a los operativos e investigaciones exitosas de la Policía Nacional y demás organismos, se han descubierto plantaciones furtivas, frustrado el envío de estupefacientes, desarticulado redes delictivas y sentenciado a sus autores. Pasamos a ser de país apto para el desarrollo de actividades de narcotráfico a país apto para el blanqueo de dinero proveniente de estas actividades, por el descuido que se produjo en esta área en pro del fortalecimiento de la lucha contra el tráfico de drogas.

El presente caso a analizar, constituyó la primera sentencia condenatoria a nivel nacional en esta materia, y tiene vinculación directa con el narcotráfico colombiano.

### **3.1. Reseña del caso (Juicio Penal No.249-Ln-2008)**

El denominado operativo “Torres gemelas”, liderado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos, que dio origen a la condena de 6 personas involucradas con el narcotraficante Hernán Prada Cortéz, inició con un correo electrónico anónimo en el que se alertaba a la policía sobre presuntas actividades ilícitas en empresas manejadas por Prada, el 26 de junio del 2006, se inicia la instrucción fiscal, adjuntándose la orden de extradición de Prada solicitada por el gobierno estadounidense a Colombia, por narcotráfico.

En de agosto de 2006, se tuvo a 10 personas vinculadas con los negocios de Prada, algunas de nacionalidad colombiana y otras ecuatoriana, entre las que figuraban sus dos ex esposas, su hijo, un coronel de policía en servicio pasivo, adicionalmente fueron aprehendidos e incautados alrededor de 50 inmuebles en varias ciudades del país a nombre de los involucrados, se verifico la participación de 7 empresas que estaban bajo las ordenes de Prada, se incautaron vehículos y otros objetos de valor relacionados.

Hernán Prada inicia sus actividades en Ecuador en el 2000 con visa de inmigrante, categoría 10-II, es decir visa de negocios, Adquiriendo algunos inmuebles y las razones sociales de siete empresas, a partir de esta fecha y posterior a la obtención de su carta de naturalización ecuatoriana, su modus operandi consistió en la inversión de dinero en el sistema financiero nacional a través de estas empresas realizando compras de más inmuebles, venta de acciones, vehículos, justificando así los grandes ingresos manejados por quienes estaban a cargo de cada una. Adicionalmente efectuaban transferencias de empresas con domicilio en otros países que también registraban la firma de Hernán Prada Cortéz y su hijo Andrés Prada Caicedo, de este modo proporcionaban apariencia de legalidad ya que estas transferencias tenían el respaldo de firmas comerciales legalmente constituidas en otras naciones. Entre las múltiples operaciones, se encuentra que la empresa ENDECODER S.A., de la cual era accionista mayoritaria la ex esposa de Prada, se identificó que varios vehículos fueron adquiridos por Hernán Prada Cortéz y transferidos a esta empresa y otras como aparentes aportes de capital para posteriormente

traspasarlos a Adriana Forero Ochoa bajo la figura de “compensación” por la presunta deuda que empresa tenía con ella.

Además de esta, las empresas inmersas, y que arrojaron importantes elementos de prueba en la investigación fueron: Hoteles Royal del Ecuador S.A. Horodelsa, no figuraba ningún empleado con relación de dependencia, ni activos fijos registrados, existen transferencias de acciones realizadas por Prada a su hijo, las cuales no constan en el libro de acciones; Alvaprad S.A.; Miloal Cia. Ltda., Inmobiliaria Galfig S.A.; Fitsaly S.A., en las cuales se observaron irregularidades en cuanto a registros de acciones y transacciones; Sociedad Hotelera Cotopaxi, Copaxi S.A., 45% de las acciones de esta sociedad, dueña del hotel Radisson de Quito, de las cuales Prada poseía 26 suites a su nombre y de sus colaboradores.

El auto de llamamiento a juicio fue dictado por la segunda sala de la entonces Corte Superior de Justicia, en base al artículo 14 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, a los presuntos implicados: Adriana María Forero Ochoa y Martha Cecilia Caicedo ex esposas de Prada; Andrés Prada Caicedo hijo de Prada, actualmente prófugo; el coronel en servicio pasivo Byron Homero Paredes Morales, uno de los más cercanos colaboradores, de Prada, y según se informa quien contribuyó a conseguir su carta de naturalización; Oswaldo Rigoberto Alvarado Palma, propietario de la piladora Virgen del Cisne, negocio asociado a la red de Prada; Richard Manuel Ramírez Paredes, gerente de Galfig S.A; José Fernando Trujillo Hidalgo, contador y representante legal de

algunas de las empresas vinculadas; Gerardo Ávila Lozano, quien realizaba frecuentes visitas a Prada en la cárcel de Cóbbita en Bogotá.

Posterior a la audiencia de juzgamiento de los imputados la sala declaró autores del delito a las dos ex esposas de Prada, y Oswaldo Rigoberto Alvarado Palma imponiéndoles una pena de Ocho años de reclusión menor ordinaria. Al resto de involucrados se los sentencia como cómplices del delito de lavado de activos, aplicando la pena de cuatro años de reclusión menor ordinaria, a excepción del coronel en servicio pasivo Byron Paredes Morales, a quien por ser mayor de 65 años se condena a cuatro años de prisión correccional. Sin que en ningún caso se apliquen atenuantes.

Se les suspenden sus derechos de ciudadanía y a los extranjeros se ordena su salida del país en cuanto sea cumplida su condena. Adicionalmente a cada uno se le impone una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del ilícito, estimado en cinco millones de dólares de los estados unidos de América, según lo dispuesto en el, a la fecha vigente, artículo 16 de la Ley Para Reprimir El Lavado de Activos. Y finalmente el comiso especial de todos los bienes, que pasarían a manos al Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos como dispone el artículo 17 y 23 del antes mencionado cuerpo legal.

Con respecto a las empresas involucradas, se dispone su extinción, el comiso de las acciones pertenecientes a los sentenciados en esas u otras empresas.

Interponen recurso de Casación los sancionados como autores, expresando que la sentencia dictada por la segunda sala de la Corte Superior viola el principio de legalidad recogido por la constitución política, código penal

y código de procedimiento penal vigentes en aquel tiempo, en lo relativo a la indebida aplicación de retroactividad de la ley con la que se juzgó a los implicados ( Ley para Reprimir el Lavado de Activos), que a criterio de los casacionistas al tiempo en que se inició la investigación el lavado de activos en su contra era un delito tipificado en la ley de Sustancias estupefacientes y Sicotrópicas, como delito conexo que necesitaba la sentencia previa por narcotráfico para su procedencia. También expresaron que no haber realizado ningún acto ilícito y que todos los bienes e inversiones realizadas provienen de fondos legales.

La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, declara improcedente el recurso de casación interpuesto, argumentando que si bien hasta antes del 2005, no hubo una ley que específicamente trate del delito de lavado de activos, el país nunca ha estado desprovisto totalmente desprovisto de normativa aplicable, ya que al formar parte de diversos convenios y tratados sobre este tema que recogen normativa de aplicación internacional, la cual de acuerdo al principio de jerarquía jurídica constante el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, son parte del ordenamiento jurídico nacional. Adjuntamente, la instrucción fiscal fue iniciada en junio del 2006, fecha para la cual ya estaba en vigencia la ley aplicada.

### **3.2.Análisis de los medios de prueba empleados**

La investigación de este caso inició con el denominado operativo “Torres gemelas”, el cual tuvo su punto de origen en un correo electrónico anónimo

enviado a la Policía Nacional, en el cual se alertaba a este organismo de las actividades que Prada realizaba dentro del país para dar apariencia de legalidad al dinero que mediante el narcotráfico había obtenido.

A partir de esto se iniciaron los procedimientos de seguimiento y vigilancia, a quienes tenían vínculos con Prada, además en coordinación con los organismos competentes se inició un arduo proceso de búsqueda de irregularidades en las empresas vinculadas con el narcotraficante, así como el estudio de cuentas bancarias, inversiones, adquisiciones inmobiliarias, de automotores y todo tipo de actividades relacionadas que arrojen indicios de anomalías que prueben el narco lavado de Prada.

### **3.2.1. Prueba documental**

Entre las pruebas documentales para demostrar la existencia del delito, la fiscalía incorporo:

- Certificados del Registro de la Propiedad de los cantones Quito, Guayaquil, Samborondón y Manta de algunos inmuebles en los que constan como propietarios varios de los encausados, de igual manera figuran los nombres de las empresas en las que los mismos se desenvolvían como representantes legales, socios o accionistas.

- Certificados de la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil relativos a las compañías que tenían como socios, accionistas, administradores o representantes a los acusados.
- Transferencias de acciones, transferencias bancarias y financieras en distintas instituciones como el Banco Internacional, Banco Pichincha y algunas instituciones financieras off shore extranjeras.
- El informe de cruce de llamadas y reportes telefónicos elaborado por el Teniente Edwin Campoverde, que evidencian conversaciones entre los involucrados.
- Oficios emitidos por Dinners Club internacional y Dinners Club del Ecuador que mencionan operaciones cuantiosas efectuadas por los implicados.
- Documentos emitidos por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, entre los que figura resolución de acusación sustitutiva No. 04-20446-CR-Jordan(s) dictada el 5 de noviembre de 2004 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, en la cual se requiere la extradición de Prada para que comparezca a juicio por los delitos de narcotráfico y afines. Además informes concedidos por la cárcel de Combita en Bogotá, centro de reclusión en el que se hallaba Prada detenido mientras se tramitaba su extradición, en el que se acreditan las visitas de algunos de los procesados.

- Informes y oficios presentados por el CONSEP sobre transferencias de dinero realizadas desde el extranjero a Prada.
- Reportes del SRI sobre declaraciones de impuestos de las personas jurídicas y naturales relacionadas.
- Avalúos de los inmuebles proporcionados por las direcciones de Avalúos y Catastros de Guayaquil y Quito.
- Carta de naturalización concedida a Hernán Prada por el entonces canciller Patricio Zuquilanda a nombre del Presidente coronel Lucio Gutiérrez, habiendo intervenido como testigos los procesados Byron Paredes y José Fernando Trujillo.

Todos los documentos aportados como pruebas en este proceso, en su mayoría informes, oficios y certificados emitidos por las entidades pertinentes, podemos concluir han tenido como fin principal el establecer la vinculación de cada uno de los procesados con las actividades de Hernán Prada, quienes en distintas formas han sido partícipes de la actividad de lavado.

Para complementar lo antedicho tomaré las palabras del autor argentino José Cafferata Nores, quien en relación a la prueba basada en informes sostiene:

*“En sentido genérico, cabe decir que "informe probatorio es la respuesta escrita, emanada de una persona jurídica frente a un requerimiento judicial, sobre datos preexistentes a tal pedido, que estén registrados en dependencias de aquélla. Empero, desde mi*



*punto de vista, el informe tendrá valor conviccional per se sólo si es expedido por instituciones públicas por medio de funcionarios autorizados, o por representantes de personas jurídicas privadas, siempre que en este último caso no hubiese duda alguna en cuanto a la autenticidad de la suscripción. La aprehensión de su peculiaridad probatoria se facilitará apenas se advierta que los datos que revele el informe serán extraídos de la "memoria" de la institución requerida (si se me permite la licencia), y no de la memoria del funcionario que los recoge y trasmite (que puede ser cualquiera que tenga acceso a ellos), que nada les agrega. De ello se deduce, con claridad, que la prueba informativa supone la previa registración de los datos sobre los cuales versará el informe, que están al alcance de quien lo suscribe en virtud de las funciones que ejerce, y no por percepciones sensoriales anteriores de éste.”<sup>19</sup>*

Dentro de la legislación ecuatoriana, al ser instrumentos otorgados por instituciones certificadas, gozan de la presunción de autenticidad, en el caso de que se confirmara su falsificación, la prueba sería ineficaz dentro del proceso, quitándole todo el mérito probatorio dentro del mismo y además, acarrear sanciones a la parte que la aportó. Si fue alterada por el funcionario público responsable, será este quien responda administrativa, y de ser el caso penalmente por este acto.

En relación al actual caso, para realizar el blanqueo de capital, la red operó mediante la creación de empresas “de papel” que sirvieron de

---

<sup>19</sup> Cafferata Norez José, “La Prueba en el Proceso Penal”, Ediciones De Palma, tercera edición, Buenos Aires Argentina, Pág. 183.

pantalla para la adquisición de inmuebles y facilitaron la movilidad del dinero de manos de Prada a sus colaboradores, quienes figuraban como accionistas, inversionistas o directivos.

Mediante la incorporación de los antes mencionados documentos de prueba se facilitó la verificación de inconsistencias tanto en las empresas como las transacciones financieras realizadas, que si bien, este tema merece una seria crítica, ya que oportunamente no fueron reportadas por las entidades responsables de hacerlo, evidencia de esto, la organización criminal manejaba inversiones en Dinners Club, cuentas en algunas instituciones financieras nacionales, realizaba periódicamente adquisiciones de propiedades, en ningún caso se detectó la presencia de fondos ilegales. No obstante, en base a los posteriores informes presentados por las mismas instituciones, se pudo establecer la correlación en las incongruencias presentes en los activos inmersos con los imputados.

Como conclusión podemos indicar que en el juzgamiento de este delito, es indispensable contar con documentos que respalden las acusaciones del fiscal, ya que su objeto principal es la comprobación de las tres básicas fases el lavado como son la colocación de fondos ilícitos en el sistema financiero, estratificación o transformación del dinero mediante la extensa tipología de lavado y finalmente la integración o legitimación, en la cual el dinero, ya con apariencia legal fluye dentro del sistema económico nacional libremente.

### **3.2.2. Prueba testimonial**

Carrara (1972), citado por Cafferata Nores establece: *“Se ha dicho que el fundamento probatorio del testimonio tiene por base la experiencia, la cual muestra que el hombre, por regla general, percibe y narra la verdad, y sólo por excepción se engaña y miente”* (pág. 93).

Los testimonios recogidos en el proceso analizado comprenden:

- La declaración del Subteniente que recibió el correo electrónico anónimo el cual alertaba a la policía sobre las actividades de Prada en el Ecuador, que sirvió para iniciar la indagación previa del caso.
- La declaración de Gloria Susana Calderón, trabajadora de una de las empresas requeridas (Sociedad Hotelera Cotopaxi, Cotopaxi S.A ), en su testimonio mencionó la vinculación de Prada y su hijo como accionistas directos del hotel Radisson Quito; adicionalmente indicó que otros hijos del narcotraficante poseían suites en el hotel; se refirió al manejo de transacciones considerables realizadas entre las compañías involucradas, bancos nacionales y empresas extranjeras; inyecciones de capital a manera de préstamos realizados por la ex esposa Martha Caicedo, quien en un último préstamo registrado en el 2004 aportó \$ 111.000.
- El gerente a la fecha del hotel Radisson, Guillermo Londoño Rodríguez, quien testificó desconocer de los préstamos efectuados por los miembros de la familia Prada y sus empresas, arguye únicamente haber tenido conocimiento de las suites de su propiedad.

- Testimonios de los oficiales de policía que participaron en actividades de vigilancia y seguimiento a los encausados, así como en los allanamientos a los inmuebles propiedad de la red de lavado. Indicaron, los movimientos realizados por cada uno de ellos, destacándose los frecuentes viajes realizados a Colombia y de Quito a Guayaquil, los diversos encuentros en hoteles del país con otras personas y entre ellos. De los allanamientos y explotación de sitios se pudo verificar la posesión de armas de fuego, joyas de gran valor, cheques, facturas, algunas en las que figuraba el nombre de Hernán Prada, así como computadores y documentos de contabilidad de las compañías.

De la aprehensión de dos de los encausados, el oficial encargado en su testimonio enfatiza en que a mas de sus documentos de identificación, tenían en su posesión alrededor de \$ 2.396 y un cheque de \$2000 emitido a su favor por una de las sociedades inmersas; que la señora Caicedo, conservaba en su poder dos documentos de identidad con los que indistintamente operaba, el uno colombiano como Martha Cecilia Caicedo y otro norteamericano como Martha Cecilia Prada.

- Se reciben adicionalmente los testimonios de auditores de la Superintendencia de Compañías y Superintendencia de

Bancos, los cuales fueron encargados del análisis de actividades de cada una de las compañías comprendidas en la investigación, distinguiéndose las reiteradas irregularidades en el manejo societario de las mismas, transferencias de acciones que no se registran en los libros y algunas no fueron reportadas a la Superintendencia; no existen títulos con las notas de cesión realizadas, hay omisiones en la presentación de documentación contable; anomalías en fechas y firmas en los libros de acciones y accionistas, en las actas de juntas generales constando juntas realizadas en Colombia, lo cual según nuestra legislación no es permitido.

En lo relativo al informe de los auditores de la Superintendencia de Bancos sobresale el análisis transaccional efectuado a cada involucrado de los últimos 5 años en base a informes de instituciones bancarias y financieras, en los que se obtuvo información de que mantenían cuentas en los bancos; Internacional, Banco del Itzmo de Panamá, Banco de Guayaquil, transacciones de las cuales casi ninguna tenía un respaldo que las justificara, y de las cuales en su mayoría figuraba el nombre de Prada. De este informe se concluyó que la inversión de Prada fue de alrededor de \$ 1. 090.570,69, de Adriana Forero \$140.000, de Andrés Prada \$ 67.634,51, de la Hotelera Cotopaxi \$ 183.000.

Dentro del análisis de esta prueba es preciso tomar en cuenta que “no obstante que las nuevas normas en materia probatoria testimonial pretenden usar la expresión testigo tanto para aquel que conoce un hecho y declara sobre él y como para el que estudia algo y rinde un concepto, es muy importante dejar bien delimitado que la prueba pericial es un medio de prueba autónomo, con características muy específicas, sometido a unas ritualidades también propias y, ante todo, esencialmente diferente a la prueba testimonial. Esta diferencia entre testimonio y peritaje pareciera desvanecerse en algunas legislaciones en las cuales expresamente se contempla la figura del testigo técnico. ¿Quién es el testigo técnico? Esta especie de testigo ofrece valiosas herramientas en la apreciación de la prueba. Se entiende por testigo técnico una persona que presencia unos hechos y además debido a su habilitación, entrenamientos, capacidades, adiestramientos, formación profesional o por su oficio, tiene una posibilidad de conocer mejor el hecho, la cosa o el fenómeno de que se trata. Esta capacidad especial le da ventajas especiales tanto para conocer como para recordar y para declarar. En estos casos, es muy frecuente que esas legislaciones permitan que ese testigo técnico, por sus circunstancias especiales, pueda ser requerido para que, además de narrar los hechos que sensorialmente le constan, emita opiniones sobre esos mismos hechos. Es decir, que también emita conceptos, en aras de integrar su percepción especializada sobre los hechos involucrando así sus conocimientos técnicos.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Arenas Salazar Jorge, Valdés Moreno Carlos Eduardo, Consejo Superior de la Judicatura, “La Prueba Testimonial y Técnica”, Primera Edición, Ediprime Ltda. Bogotá, Colombia. 2006. Pág. 35

Con la apreciación hecha, podemos indicar que lo más relevante de las participaciones testimoniales, elemento clave que la fiscalía buscó aportar para asegurar la convicción de los magistrados, fue la identificación de actividades poco usuales que los procesados realizaban periódicamente. De las diligencias de vigilancia y seguimiento a los imputados se logró verificar los distintos vínculos de cada uno de ellos con Hernán Prada; se identificó que sus ex esposas, pese a no reportar ninguna actividad laboral, manejaban sumas de dinero muy elevadas y realizaban gastos de igual manera cuantiosos en distintos centros comerciales del país, la mayoría en efectivo. De sus colaboradores cercanos quienes operaban como representantes o administradores de las empresas, se evidencio transacciones y movimientos de dinero de la misma forma.

También fue trascendental la información proporcionada por los auditores tanto de la Superintendencia de Bancos como de Compañías, pues sus informes y alegaciones corroboraron las omisiones y transgresiones suscitadas en el manejo de las sociedades que operaba esta red de lavadores.

Una vez incorporados como prueba estos testimonios como advierte Fierro-Méndez, “para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el

contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad.” (Pág. 176)

El grado de convicción que cada testimonio provoca en los jueces constituye una cuestión de carácter subjetivo concerniente a la esfera reservada por la ley a los juzgadores, quien por su inmediación frente a los órganos de prueba y con la facultad de apreciar bajo las reglas de la sana crítica la lógica y experiencia, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones percibidas durante el juicio.

### **3.2.3. Prueba pericial**

Los peritajes aportados fueron los pertenecientes a:

- Ingeniera en sistemas Ximena Vaca quien fue la encargada de la revisión de los respaldos de información de los discos duros obtenidos en los computadores de las empresas investigadas, de los cuales obtuvo para su posterior análisis específico, archivos relevantes en Word, Excel, y paquetes contables.
- Teniente Edwin Campoverde quien efectuó el peritaje de llamadas telefónicas y el cruce de las mismas, el cual sirvió de confirmación de los vínculos mantenidos entre los involucrados.
- El economista William Vergara, Licenciado Rodrigo Ledesma, peritos contables y financieros que analizaron la documentación obtenida en los allanamientos a las compañías y evidenciaron las anomalías latentes.



- El arquitecto Ángel Castillo, quien realizó el avalúo de los bienes aprehendidos, consistentes en 120 inmuebles y los muebles en su interior, automotores, joyas, obras de arte, etc. estableciéndose la suma de alrededor de \$8.587.817,00.
- Economista Luis Bolívar Guamán, Ingeniera Elizabeth Correa, autores de la pericia que logró identificar a detalle la manera en la que se procedió paso a paso al blanqueo del dinero proveniente de compañías extranjeras de irregular funcionamiento, hasta su reintegro a manos de Hernán Prada y su familia.

Como primera cuestión tratar sobre este medio de prueba me referiré al número de peritos que intervinieron, que en este caso fueron seis, una cifra pertinente para lo que se buscaba probar, pues cada uno de ellos aportó un concreto diagnóstico tanto de la documentación, los estados de cada una de las empresas, así como los inmuebles pertenecientes a los involucrados, pues considero que un mayor número de expertos no constituye garantía de mayor certeza para los jueces al emitir su valoración, es la calidad de la pericia sumada a la forma de ser expuesta como prueba lo que otorga su viabilidad y certidumbre dentro del proceso. Como complemento de esto me adhiero a lo enunciado por Florian quien es citado por Cafferata Norez cuando indica; *“Antiguamente, bajo la idea de que perito y testigo eran conceptos semejantes, y por el imperio de la regla "testis unus...", las leyes requerían más de un experto. Hoy, por lo general, tratan de reducir su número para*

*evitar las discusiones entre ellos, que en ciertos casos convirtieron a los estrados judiciales en escenarios de estériles contiendas científicas”.*

En cuanto a la valoración del testimonio pericial, “aun cuando alguien ha considerado conveniente que el dictamen tenga fuerza obligatoria para el juez (retomando, así, un poco al concepto histórico de que la pericia es un juicio de hecho emitido por una persona considerada como juez del punto), se coincide en que la opinión del perito no obliga al magistrado, quien es libre de aceptar o rechazar total o parcialmente el dictamen. Pero para hacerlo *debe fundamentar* su aceptación o su rechazo, observando en el razonamiento respectivo las reglas que gobiernan el pensamiento humano: lógica, psicología y experiencia común, lo cual permitirá su control por vía del recurso de casación. Esto es muy importante, ya que en muchos casos para expresar que el dictamen pericial no *vincula* al tribunal, se ha dicho comúnmente que el juez es *peritos peritorum*, pero ello no significa que la ley crea en la omnisciencia del juez. Tan sólo le confiere el poder (y el deber) de *someter* a su crítica las conclusiones periciales. En efecto: puesto que la pericia es sólo un medio de prueba, sus conclusiones no serán obligatorias para el juez, quien podrá desatenderlas, e incluso (caso extremo) decidir en oposición a ellas”.<sup>21</sup>

Si bien el informe pericial puede ser desestimado por el juzgador al no considerarlo como un elemento que aporte elementos trascendentes a la causa, la aseveración de un experto siempre será importante para motivar la decisión de quien decidirá en un proceso judicial, mas aun en delitos que requieren de un arduo régimen investigativo, como el presente, que basa su

---

<sup>21</sup> Cafferata Nores José, “La Prueba en el Proceso Penal”, Ediciones De Palma, tercera edición, Buenos Aires Argentina, Págs. 84, 85

sustento en las experticias que otorguen indicios de vinculación de los capitales furtivos con quienes a sabiendas de su procedencia pretenden penetrar estos capitales en el flujo económico común y obtener sus réditos, pues vale la pena puntualizar que se sanciona con este tipo penal, a quienes practiquen alguna de las distintas formas de dar apariencia legal a patrimonios ilícitos independiente de la persona u organización criminal que produjo este dinero.

### **3.2.4. Deficiencias investigativas**

Dentro del caso podemos observar algunas deficiencias principalmente relacionadas con la detección de las actividades ilegales de esta red de lavadores, pues como de lo que el proceso arrojó, la investigación partió de un correo anónimo recibido por la Policía y por información relacionada a Hernán Prada que la DEA pudo aportar. La Unidad de Inteligencia Financiera no aportó en el tema en absoluto, siendo el organismo creado por ley para: (Art. 10 Ley para reprimir el lavado de activos 2005):

- a) Elaborar programas y ejecutar acciones para detectar, de conformidad con esta Ley, operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, con la finalidad de promover su sanción y recuperar sus recursos;
- b) Solicitar de los sujetos obligados a informar, de conformidad con lo previsto en esta Ley, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, con la finalidad

de procesarla, analizarla y custodiarla; y, de ser el caso, respecto de la información que le haya sido entregada, solicitar aclaraciones o ampliaciones;

c) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos análogos nacionales e internacionales, para intercambiar información general o específica relativa al lavado de activos, así como ejecutar acciones conjuntas, rápidas y eficientes;

d) Remitir a la fiscalía la información relacionada con operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas con los sustentos del caso;

e) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la información obtenida como producto de sus actividades, de conformidad con el reglamento correspondiente;

f) Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de activos; y,

g) Contratar, cuando sea del caso, empresas especializadas en ubicación de fondos y activos ilícitos, con la finalidad de gestionar su recuperación.

Ninguno de los anteriores literales se ha aplicado en el caso investigado y hasta la presente fecha, es mínima la intervención de este organismo en los procesos iniciados, vale la pena considerar que al momento en el que se llevaba a cabo la búsqueda de elementos para el

juzgamiento de Prada y su organización, la Unidad no se encontraba pleno en funcionamiento se hallaba en proceso de contratación de su cuerpo técnico y adquisición de equipos.

Fue la Fiscalía en cooperación con la Policía Antinarcóticos y el CONSEP quienes realizaron todo el operativo que obtuvo favorables resultados.

En relación con la falta de reportes de operaciones sospechosas por parte de las instituciones involucradas obligadas a hacerlo, podemos señalar que como indicaron los imputados en su momento, para ellos fue sumamente fácil realizar las distintas transacciones tanto en bancos como en la Superintendencia de Compañías, pues el control era insustancial. Bastó con cumplir algunas disposiciones señaladas en la Ley de Compañías para que las empresas operen normalmente sin que se detecten las irregularidades internas que se evidenciaron en los peritajes y auditorías posteriores.

Bajo estas premisas queda la duda latente en primer lugar, de la falta de una efectiva intervención de las entidades reportantes, quienes pese a la obligación de informar cuanta situación dudosa se verifique en sus clientes no lo hacen activamente. Y en segundo lugar podríamos especular acerca del conocimiento que tienen las instituciones bancarias de la procedencia del dinero de cada uno de sus clientes pero que al parecer bajo el criterio del sigilo bancario no toman en consideración como sospechoso los cuantiosos negocios de procedencia ambigua que efectúan los mismos, podría, de ser el caso, responsabilizarse a la

institución por colaborar en el ocultamiento del dinero ilegal, pues como la experiencia internacional ha acreditado y tomando las palabras de John Coleman, autor de *Conspirator's Hierarchy: The Story of the Committee of 300*, "El tráfico de drogas y sus delitos conexos no podrían funcionar sin la ayuda de algunos de los mayores bancos mundiales".

En lo relativo a las técnicas de investigación, como se pudo verificar las únicas estrategias empleadas fueron el seguimiento personal efectuado por miembros de la Policía a los involucrados lo cual aportó para acreditar la vinculación de los mismos al narcotraficante y sus empresas. Adicionalmente hubiera sido necesaria la presencia de agentes encubiertos, sistema que en el país, de acuerdo a fiscales y policías, ostenta un uso limitado, como excepción es aplicado en indagaciones de lavado de activos, y se los reserva, ocasionalmente, para desarticular redes de narcotráfico y afines, siendo una fuente de información, acorde a la evidencia internacional, que ha sido sumamente útil para la ubicación de grandes lavadores de dinero, la aprehensión de los mismos y su juzgamiento. Para corroborar la eficacia de este medio tomaré la experiencia Argentina en la que producto de un operativo de realizado en cooperación con los Estados Unidos, denominado "Operación Casablanca", agentes encubiertos tuvieron contacto con narcotraficantes del Cártel de Juárez y transformaron activos en su nombre. Los agentes se infiltraron y convencieron a los miembros del cartel de su confiabilidad para colocar los fondos en bancos locales y posteriormente remitirlos a destinatarios en otros países donde se procedería a dar legal apariencia al dinero mediante la adquisición de inmuebles, de esta forma se logró

ubicar tanto a los traficantes como a los contactos en cada país que iban a colaborar en el blanqueo del dinero de la organización criminal mexicana.

22

Otra falla probatoria-investigativa de nuestro país es la ausencia de cooperación internacional, siendo esta de gran importancia para la identificación de redes de lavado, narcotráfico, terrorismo y demás delitos de trascendencia mundial. Muchos países colaboran y trabajan en conjunto para la consecución de estos fines, las alianzas permiten fortalecer los esfuerzos de investigación, con el apoyo humano y técnico entre naciones se ha logrado identificar a las redes criminales más grandes a nivel internacional, establecer la tipología más utilizada por los lavadores para perpetrar su delito, además de distinguir a las entidades off shore y paraísos fiscales donde con más frecuencia se verifican actividades relacionadas.

## **CAPITULO IV**

### **Medios probatorios alternativos a considerar en las investigaciones de lavado de activos.**

En sentido amplio nuestra legislación en materia probatoria es bastante limitada, taxativamente establece el Código de Procedimiento Penal los medios de prueba reconocidos que deben practicarse, estos son mecánicamente incorporados en los procesos penales y civiles, limitan a los abogados a centrarse en recursos preconcebidos

---

<sup>22</sup> <http://www.espectador.com/text/documentos/doc06151.htm>

que en muchos casos no constituyen suficiente elemento de convicción para los juzgadoras al momento de elaborar sus sentencias.

En materia de lavado de activos, en Ecuador la experiencia probatoria es reducida, las investigaciones no cuentan con un plan de acción eficiente que faculte a todos los sujetos involucrados a obtener pruebas aptas para el desarrollo favorable durante los juzgamientos. La falta de capacitación y conocimiento en instituciones reportantes, la fiscalía, los organismos policiales especializados y hasta de los mismos juzgadores ha significado para el país la ubicación en la lista negra de la GAFI como una nación que faculta a los lavadores de dinero a realizar sus actividades ilícitas sin mayor inconveniente.

Con esta alerta, el gobierno nacional, representado por Diego García, el entonces procurador general del estado, y quien a su vez ostenta la calidad de presidente del directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, inició una serie de mecanismos para modificar estas condiciones perjudiciales para el país. *Durante cuatro meses hizo un prolijo examen de las normas anti lavado de dinero y luego se dedicó a la acción sobre la base de los lineamientos de un documento llamado Plan Continuo del CONCLA. El corazón de dicho plan está basado en reformas a la actual ley contra el lavado de dinero para alcanzar un mayor control sobre las entidades que se deben vigilar, el aumento del número de las mismas y la creación de un nuevo organismo técnico llamado Unidad de Análisis Financiero. “La intención de estas reformas, es regularizar el control en los sectores de la economía que actualmente no tienen este tipo de control, por no constar en la ley vigente” dijo el Procurador durante su comparecencia. Explicó que este control es*



*fundamentalmente sobre negocios legales, para prevenir que en éstos se infiltre dinero procedente de actividades ilícitas. “Se trata de obtener la información necesaria de los sectores de la economía formal y de que éstos tengan pautas claras para el cumplimiento de normas, como ya las tiene, por ejemplo, el sector financiero”. Este proyecto, según lo destacó el Procurador General, introduce otra reforma fundamental: tipifica de manera expresa el delito de financiamiento del terrorismo y determina como sanción la pena de reclusión de 6 a 9 años.*

*Otros aspectos fundamentales que contemplan estas reformas tienen que ver con el fortalecimiento de la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos, sobre el sector financiero y de seguro privado y de otros entes de control con mejoras para congelar, embargar o confiscar activos o bienes provenientes de actividades ilícitas y su respectivo manejo; así como con el régimen de sanciones por falta de información y por falta de declaración en el ingreso o salida de dinero del país en los controles aduaneros de las fronteras o puertos y aeropuertos del país.*<sup>23</sup>

Considerando la iniciativa del gobierno nacional para retirar al Ecuador de la lista negra y cumplir con todos los compromisos que el organismo internacional señaló como primordiales, es importante señalar, en base a la experiencia internacional, la necesidad imperiosa de fortalecer nuestro sistema probatorio e implementar nuevos métodos tecnológicos y científicos que permitan conducir los procesos penales de manera eficaz y frenar el avance de la delincuencia organizada.

#### **4.1 La autonomía del delito y la cooperación internacional**

---

<sup>23</sup> Revista Competencia, Ecuador enfrentó al GAFI con éxito, el día que santo Tomás Moro le dio una mano, <http://www.revistacompetencia.com/382/ecuador.php>

Pese a que con la creación de la ley para reprimir el lavado de activos en el 2005, se extinguió la prejudicialidad en la que este ilícito solo podía ser investigado y sometido a juzgamiento si existía una sentencia previa condenatoria por alguno de los delitos enumerados en la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en ese entonces vigente. Se amplió el alcance de los delitos, en primer lugar, pues ya no solo se refiere a los relacionados con el narcotráfico y sus afines, al presente se consideran todas las faltas tipificadas por las leyes penales que generen un rédito económico a sus autores, como delitos previos al lavado de activos.

Sin embargo, en la práctica comúnmente el principal antecedente que tanto los investigadores, la fiscalía y los miembros de la judicatura toman en cuenta en lo que refiere a lavado de activos es la existencia, si bien no específicamente condenas, de procesos iniciados sobre otros delitos relacionados que arrojen evidencia de un posible blanqueo. Esta estrategia es muy común en todos los procesos y brinda un apoyo considerable a la investigación y consecuente procesamiento de involucrados.

*Se puede observar, que a pesar de sustentarse la autonomía del delito de Lavado de Activos, siempre es indispensable demostrar, aun mediante prueba de indicios, que los bienes objeto del delito de Lavado de Dinero y de Activos, provienen de acciones delictivas previas, pues es la característica esencial que identifica esta clase de hechos que afectan el espectro financiero de un país.<sup>24</sup>*

---

<sup>24</sup> CÁMARA PRIMERA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO, Caso Cristian Elliot Machuca Parras, sobre lavado de dinero en el Salvador. Pág. [http://cicad.oas.org/Lavado\\_Activos/ESP/Caso\\_Salvador\\_Cristian\\_LD.htm](http://cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/Caso_Salvador_Cristian_LD.htm)

El inconveniente radica en los casos en los que el delito subyacente al lavado se ha perpetrado fuera del territorio nacional, si bien está considerada esta posibilidad por la legislación nacional, no está expresamente señalado en la ley. Adicionalmente existe la probabilidad de que en el país o países de presunto origen no se hayan llevado a cabo indagaciones, los sospechosos no posean antecedentes y no existan medios de comprobación certeros del génesis de los activos de dudosa licitud. Este ha sido un obstáculo significativo para las autoridades, en especial en lo que respecta a movilización de capitales dudosos en efectivo por personas que ingresan al país, por la falta de comprobación del origen ilícito del capital transportado han dejado en libertad a varios extranjeros que entran al país con altas sumas de dinero en efectivo, pero al carecer de medios inculpatórios se descartan futuras investigaciones.

Bajo estas circunstancias la calidad de los elementos probatorios independientes que proyecte la investigación al proceso es fundamental, que pese a desconocerse el delito previo generador, por la alta cantidad de indicios sospechosos reúne los requisitos para considerarse lavado de activos. La identificación de elementos de prueba debe ser exhaustiva y no escatimar en diligencias, y la cooperación institucional internacional es indispensable. Las autoridades migratorias deben tener una formación específica en detección de movimientos inusuales de capitales, en los casos de ingresos por cualquier vía, no solo en aeropuertos y puertos marítimos. En los casos de mayor volumen de capitales, la tarea de identificación de riesgos radicará en las instituciones reportantes de operaciones sospechosas en conjunto con la UAF y la fiscalía

---

quienes independientemente del delito subyacente deberán elaborar completos informes de investigación para otorgar a los juzgadores los elementos de convicción para el procesamiento de los involucrados.

La cooperación internacional entre instituciones es trascendente, como se puede evidenciar, (Caso Hernán Prada) si la DEA y la policía antinarcóticos colombiana no hubieran alertado a las autoridades nacionales sobre las presuntas actividades ilícitas de esta red, no hubiera sido posible el procesamiento de los responsables, si bien no se cuenta con sentencias condenatorias, los indicios más relevantes se perciben en el gran movimiento de dinero diversificado que utilizan los delincuentes, transacciones económicas, de bienes raíces, inversiones, aportes, etc., que los sospechosos realizan en todo el mundo, no a su nombre precisamente, por lo que es muy dificultoso hallar los rastros del dinero mal habido, pero es ahí donde entra en acción la cooperación multilateral que ha permitido, desarticular grandes ordenaciones blanqueadoras de capitales.

*Para derrotar a los lavadores de dinero internacionales, es imperativo que los países del mundo colaboren en intercambiar información y que cooperen en las investigaciones y los casos de decomiso de bienes. Estados Unidos tiene por política y práctica, de conformidad con la autoridad legal, compartir el producto de los procesos de decomiso con los países que hicieron posible o facilitaron sustancialmente el decomiso de bienes conforme a las leyes norteamericanas.*

*Hasta julio de 2000, el Departamento de Justicia, con el consentimiento de la secretaria de Estado norteamericana, ha transferido aproximadamente 169 millones de dólares a 26 países, en reconocimiento de su ayuda en el decomiso. Creemos que compartir los bienes entre los países aumenta la cooperación internacional en los casos de decomiso, al crear un incentivo para que los países colaboren entre ellos, no importa dónde estén situados los bienes o cuál sea la jurisdicción que por último habrá de ejecutar la orden de decomiso. Lo más importante es privar a los delincuentes del producto de sus actividades ilegales.*<sup>25</sup>

## **4.2 Las operaciones encubiertas**

Son sin duda el mecanismo que a nivel internacional ha tendido mayor resultado en las investigaciones y procesamientos por lavado de activos, pues basándose en rastros sospechosos de actividades furtivas se han logrado estructurar importantes y exitosos operativos.

Un ejemplo significativo de esto lo obtenemos en el caso de la “Operación Casa Blanca” ( México- EUA, 1997), esta red operaba mediante transacciones interbancarias entre Estados Unidos y México, Primero el dinero se introdujo al sistema bancario aparentando licitud, posteriormente fue transferido de un banco estadounidense a un banco corresponsal de un banco mexicano en Estados Unidos, del cual se enviaba transferencias electrónicas que a una cuenta en dólares en Tijuana, para ser trasladados a un banco corresponsal para fondear giros bancarios. Finalmente los fondos eran separados de su origen ilícito a través de la compra de

---

<sup>25</sup> LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO, Perspectivas Económicas. Publicación Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 6, N° 2, mayo de 2001, Pág. 33

giros bancarios y regresaban al sistema bancario estadounidense. Los fondos fueron originados desde los agentes encubiertos por medio de transferencias electrónicas para evidenciar la cadena de ilicitudes que los bancos realizaban.

Con esta operación encubierta de 3 años de duración, se encausó a 3 bancos extranjeros y 28 banqueros, once bancos enfrentaron acciones civiles y administrativas, se procesó a un total de 114 implicados.

En una operación de estas características los investigadores inician con la identificación de sujetos que pueden estar involucrados o predispuestos a, lavar dinero y, mediante agentes encubiertos o informantes confidenciales, brindan a ese sujeto la oportunidad de lavar fondos aparentando ser ingresos criminales. La cuestión principal es que el o los agentes se infiltren de manera íntegra, sin levantar ninguna sospecha y como partícipes de las actividades clandestinas conozcan cada movimiento de los ejecutores y todos los involucrados adicionales.

*De esta manera este tipo de operaciones son una de las formas de mayor eficacia en la obtención de evidencia por parte de las autoridades en un proceso judicial de lavado de dinero puesto que ponen a prueba no solo la integridad de los usuarios de instituciones financieras y de control sino también la de sus funcionarios y empleados.*<sup>26</sup>

*El artículo 20 de la Convención contra la Delincuencia Organizada respalda específicamente las técnicas de investigación de la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas. Estas técnicas son especialmente útiles para hacer frente a grupos delictivos organizados complejos debido a los peligros y*

---

<sup>26</sup> Ramón García Gibson, Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo, INACIPE. Instituto Nacional de Ciencias Penales, México D.F, 2009

*dificultades inherentes al logro al acceso a sus operaciones y a la reunión de información y pruebas para su utilización en los procesos nacionales, así como para prestar asistencia judicial recíproca a otros Estados Parte. En muchos casos métodos menos invasivos simplemente no resultarían eficaces, o no podrían llevarse a la práctica sin riesgos inaceptables para los partícipes.*

*Las operaciones encubiertas podrán utilizarse cuando sea posible que un agente de los servicios encargados de hacer cumplir la ley u otra persona se infiltre en una organización delictiva para reunir pruebas. La vigilancia electrónica en forma de dispositivos de escucha o interceptación de las comunicaciones cumple una función similar y es a menudo preferible cuando un grupo muy unido no puede ser penetrado por una persona de fuera o cuando la infiltración o la vigilancia física representarían un riesgo inaceptable para la investigación o la seguridad de los investigadores. Dado su carácter invasivo la vigilancia electrónica esta por lo general sujeta a un estricto control judicial y numerosas salvaguardias legales para prevenir su uso indebido.<sup>27</sup>*

### **4.3 La prueba documental reforzada**

Como lo hemos señalado anteriormente, la prueba documental, en materia de lavado de activos constituye un pilar fundamental de respaldo de las actividades que el lavador ha realizado en la consecución de sus fines. Por esta razón es de vital importancia que se consideren como elementos probatorios de este tipo, no únicamente aquellos instrumentos contenidos en un respaldo de papel que pueda contener información, con los avances que la ciencia y

---

<sup>27</sup> Oficina contra la Droga y el Delito, Programa Mundial Contra la Trata de Personas , Manual Para La Lucha Contra La Trata De Personas, Pág. 81, Naciones Unidas, Nueva York ,2007.

tecnología nos brinda en estos días, es inconcebible que los organismos investigadores y de inteligencia financiera no cuenten con un sistema de procesamiento de información digital que permita incorporar estos nuevos documentos a los procesos.

Si bien para los procesos judiciales en nuestro país aún opera un sistema físico de almacenamiento y archivo de documentos, consideramos como factible la posibilidad de que en un par de años esto se modernice y existan respaldos digitales de los archivos procesales, para un eficaz y fácil acceso a los mismos después de sentenciados.

Nuestro código de procedimiento penal faculta al juez la autorización, a pedido del Fiscal, para que por sí mismo o por medio de la Policía Judicial la pueda retener, abrir, interceptar y examinar, la correspondencia epistolar, telegráfica, telefónica, cablegráfica, por télex o por cualquier otro medio de comunicación, cuando haya suficiente evidencia para presumir que tal correspondencia tiene alguna relación con el delito que se investiga o con la participación del sospechoso o del imputado.<sup>28</sup>

Con este antecedente podemos ampliar el sentido de la disposición hacia la documentación que pueda contener en relación a cada uno de sus clientes, alguna de las instituciones que hemos mencionado como vulnerables a la introducción de capitales producto de actividades ilegales.

---

<sup>28</sup> Art. 150 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano.



En la actualidad, los servicios bancarios se realizan mediante transferencias o giros electrónicos, lo que dificulta la posibilidad a la institución financiera de detectar alguna actividad sospechosa en quien realiza la gestión, de igual manera la compra de acciones y títulos valor se realiza virtualmente y se desconoce al beneficiario final, otro conflicto en este caso para las casas de valor o corredores de bolsa, de igual manera los inversionistas gestionan sus negocios por medios electrónicos de los cuales la única evidencia se remite a conferencias virtuales, emails , etc. De aquí la importancia de otorgar un especial tratamiento probatorio a estos métodos contemporáneos de registro de transacciones comerciales y financieras.

*Los modernos sistemas financieros, además de facilitar el comercio legítimo, permiten también a los delincuentes ordenar el traslado de millones de dólares instantáneamente por medio de computadoras personales y antenas que reciben señales de satélites. Debido a que el lavado de dinero depende hasta cierto punto de sistemas y operaciones financieras existentes, las opciones que tiene el delincuente para lavar el dinero están limitadas sólo por su imaginación.*<sup>29</sup>

Empresas aseguradoras, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, fiduciarias, entre otras serían las llamadas a conservar por un período mínimo de 5 años la información personal de todos sus clientes así como el respaldo físico y digital de cada transacción o movimiento que durante el tiempo de su relación comercial han mantenido los usuarios, estos elementos, en su momento serán de gran utilidad en las investigaciones por lavado de activos cuando se arrojen indicios

---

<sup>29</sup> La Lucha Contra El Lavado De Dinero, Perspectivas Económicas. Publicación Electrónica del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 6, N° 2, mayo de 2001, Pág. 5

de operaciones sospechosas, los sujetos obligados deberán informar a la Unidad de análisis Financiero y con este respaldo sustentar sus presunciones sobre el cliente en duda.

#### **4.4 El conocimiento del cliente, reporte de operaciones sospechosas**

Uno de los objetivos de las medidas para controlar el lavado de dinero es motivar a los funcionarios bancarios y a otros para que se informen bien acerca de quiénes son sus clientes y poder así estar en condiciones de identificar e informar transacciones sospechosas. Pocos funcionarios bancarios saben en qué tipo de crímenes - si los hay- pueden estar comprometidos sus clientes. Si los clientes engañan a funcionarios bancarios o abogados para hacerles creer que, a lo más sus fondos depositados son “sólo” una evasión de impuestos, entonces el informe de transacción sospechosa por corrupción no se realizará. Un paso fundamental es que todos los crímenes deben ser incluidos dentro de la obligación para informar fondos sospechosos.

*En 2000, un grupo de bancos internacionales privados con la participación de Transparencia Internacional se comprometieron en un esfuerzo voluntario para controlar el lavado de dinero dando un golpe cortante a la multiplicidad de asuntos jurisdiccionales y enfrentando el grave daño de reputación experimentado a través de los medios a raíz del lavado de dinero. Once bancos (dos se han fusionado desde entonces), que rinden cuenta de al menos un tercio de los fondos bancarios privados a nivel mundial, acordaron en Wolfsberg, Suiza, establecer una norma mundial común para regular sus operaciones bancarias privadas. Los Principios de Wolfsberg incluyen una gestión común y oportuna o procedimientos para “conocer*

*a su cliente” para abrir y mantener en supervisión las cuantas, en especial aquellas identificadas como pertenecientes a “personas políticamente expuestas” (es decir, funcionales públicos potencialmente corruptos). En el caso de las personas individuales, si existe duda entre el beneficiario y el titular de la cuenta, “el banco establecerá en qué calidad y en representación de quién está actuando el titular de la cuenta”. En el caso de las empresas y los fondos mutuos, “el funcionario bancario privado comprenderá la estructura de la empresa [o fondos mutuos] lo suficiente como para determinar quién es el proveedor de los fondos, el (los) principal(es) dueño(s) de las acciones y quiénes tienen control sobre los fondos”. Una parte clave del proceso de revisión para “conocer a sus clientes” es determinar la fuente de los fondos que se ha colocado. Los Principios de Wolfsberg estipulan que si no existe una explicación legítima plausible para las transacciones, se tomará una decisión para continuar la relación comercial bajo un control aumentado; cancelar la relación comercial; o bien, informar la relación comercial a las autoridades. Es posible bloquear los activos y someter las transacciones para su aprobación, según lo requieran las leyes y reglamentos locales, que es el caso de Alemania, Liechtenstein y Suiza. La aplicación de estos principios en forma retrospectiva es una cuestión clave para los bancos. Mucho se ha discutido acerca de que las cuentas dudosas se abrieron bastante antes de que se pusieran en práctica las normas de gestión oportuna. Un camino a seguir es recopilar una lista de los funcionarios públicos, los ex funcionarios y sus familiares. Sin embargo, aún si dicha “arriesgada lista” se elabora y se mantiene en forma rigurosa, es necesario contar con una cultura que cumpla mucho más con sus compromisos y una tecnología adecuada para supervisar las cuentas para asegurar que los fondos dudosos no se pierdan o queden sin informar. Los bancos que se suscribieron a los*

*Principios de Wolfsberg en ningún caso son sometidos a la supervisión de sus reguladores principales de sus matrices, pero su compromiso público con los principios produce un fuerte incentivo de reputación para cumplir con sus obligaciones. El hecho de que en la actualidad otros bancos deseen firmar los Principios de Wolfsberg destaca hasta qué punto los asuntos concernientes a la reputación han pasado a ser un aspecto central para la banca internacional.*<sup>30</sup>

Las políticas de conocimiento del cliente, permiten a la institución, conocer a detalle, sus antecedentes económicos, y poder durante su relación y posteriormente, los movimientos de dinero que este realice. Dentro de este conocimiento deben especificarse desde su naturaleza jurídica, sus actividades regulares y ocasionales, el origen de los recursos con los que opera, la naturaleza de los bienes que administre, si maneja inversión extranjera, entre otras variables que en este caso, la institución financiera debe estar al tanto para, al momento de verificarse algún movimiento inusual injustificado, pueda reportarlo a Análisis Financiero, y la unidad en coordinación con la fiscalía, respaldados con todos los elementos probatorios otorgados por la institución puedan iniciar el respectivo proceso incriminatorio a sus responsables.

#### **4.5 La importancia de la prueba indiciaria**

Tomaré como referencia a lo señalado por Ángel Guijarro Jefe de Sección en la Brigada de Investigación de Delitos del Cuerpo Nacional de Policía de España, quien en su documento “La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos-

---

<sup>30</sup> Levi Michael, Lavado de Dinero: la banca privada se vuelve menos privada, documento electrónico, [http://200.2.12.198/nede/files/archivos/gi\\_money\\_laundering\\_spanish.pdf](http://200.2.12.198/nede/files/archivos/gi_money_laundering_spanish.pdf), Pág. 10

Metodología de la investigación policial del blanqueo de capitales” señala: *El objetivo de buscar estos indicios es el de orientarnos sobre la búsqueda de operaciones que presentan un riesgo potencial de estar particularmente vinculadas con actividades de blanqueo de capitales, teniendo en cuenta que ello NO implica que estas operaciones hayan de estar necesariamente vinculadas al blanqueo de capitales. Se pretende con ello poner al descubierto operaciones complejas, inusuales o que no tengan un propósito económico o lícito aparente. Los indicios que van a ser buscados tratarán primero de probar la relación entre las personas y las transacciones realizadas; y luego tratarán de probar que los capitales utilizados por las transacciones proceden de actividades delictivas.*

El autor, para la búsqueda de elementos que constituyan indicios de trascendencia divide a los elementos a investigar en los siguientes grupos:

**PERSONAS**, en las que incluye:

- *GRUPO FAMILAR Y SOCIAL: Parientes hasta el cuarto grado que aparezcan como titulares de algún elemento patrimonial o del propio patrimonio en su conjunto.*
- *GRUPO SOCIETARIO: Sociedades civiles o mercantiles que figuren como titulares de bienes integrados en el patrimonio investigado.*
- *GRUPO DE TERCEROS: Lo componen aquellas personas físicas o jurídicas que mantienen algún tipo de vinculación con el patrimonio y que, sin embargo, no forman parte de los grupos anteriores: Sociedades instrumentales, Comunidades de bienes, Testaferros, Representantes y apoderados, Accionistas, socios y administradores de sociedades participadas.*

***BIENES Y DERECHOS***, la investigación aquí se centrará en determinar la procedencia, titularidad y seguimiento de todos los bienes y derechos, atendiendo a los siguientes aspectos:

- *Identificación directa e indirecta de todo tipo de bienes.*
- *Relación que tienen con los investigados.*
- *Elaboración de un catálogo general de bienes.*
- *Elaboración del perfil económico de los investigados.*
- *Evolución de los incrementos patrimoniales*
- *Naturaleza, origen y destino de las transacciones, prestando especial atención a los siguientes elementos:*

- *Reconstrucción de la operación.*
- *Preexistencia de fondos.*
- *Irregularidades detectadas.*
- *Personas intervinientes.*
- *Indicios que se aprecian.*
- *Establecer la forma de pago.*
- *Origen/destino de los fondos.*
- *Justificación bancaria.*
- *Justificación mercantil.*
- *Rentabilidad de la operación.*

***ACTIVIDADES (Hechos)***, se trata de concretar las siguientes relaciones:

- *Relación de las personas con otras personas.*
- *Relación de las personas con los bienes.*

- *Relación con actividades delictivas.*

***LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.*** Desde un punto de vista teórico podemos establecer diversas formas de clasificar las fuentes, así:

- *Abiertas, reservadas y confidenciales.*
- *Internas, externas o internacionales.*
- *Generales: sirven para conocer la información de todas las personas en las bases de datos de agrupación general.*
- *Específicas: permiten conocer los datos sobre personas usuarias de algún servicio específico.*

Considerando y analizando estas premisas, los indicios pueden adquirir el suficiente valor de prueba que se necesita para emitir una sentencia, si este es profunda y minuciosamente estudiado en su contexto específico. El indicio es la clave dentro de este tipo de delitos en los que no existen evidencias flagrantes de la comisión del hecho, se conforma de una cadena de actividades y una serie de involucrados los que participan en este ilícito mediante independientes acciones lo que dificulta su descubrimiento, por esto es imprescindible que tanto el equipo investigativo como los juzgadores otorguen un valor especial a esta prueba la cual constituirá la base del proceso.

#### **4.6 Pruebas periciales especializadas**

Con la recopilación de información que las entidades reportantes puedan otorgar dentro de un procedimiento por lavado de activos, es necesaria la realización de meticulosos y precisos análisis de este conglomerado de

documentación, testimonios y demás elementos extraídos para en base a estos obtener la prueba necesaria para los procesos judiciales.

Una de las ramas periciales de mayor utilidad en delitos financieros es la contabilidad forense, una alternativa que ha facultado combatir la corrupción, el delito, el contador forense aporta pruebas y evidencias ante los jueces y complementa con conceptos y juicios de valor técnico, permitiendo que la justicia cumpla con sus mandatos y objetivos, frente a investigaciones tanto en el sector privado como público. La Contabilidad Forense es una herramienta de apoyo procesal complementaria ya que los dictámenes rutinarios sobre los estados financieros no reúnen todos aquellos elementos para desencadenar un litigio; el contador forense es quien aportará los argumentos sobre hechos particulares, una vez que sean sometidos a una exhaustiva verificación, con cálculos, valoraciones y evaluaciones objetivas que sirvan de soporte a los jueces para tomar sus decisiones.

La delincuencia ha evolucionado considerablemente en lo que respecta a mecanismos de comisión y ocultamiento de sus crímenes, esto obliga a las autoridades, entidades y equipos de investigación financiera a crear y a disponer de modernas y sofisticadas operaciones para administrar de manera apropiada el riesgo; y es ahí donde la contabilidad forense se instituye en la vía más certera para descubrir y para prevenir delitos financieros.

*Considerando que el contador forense debe de manera inicial tratar de identificar el hecho ilícito y partiendo de éste debe involucrar situaciones de*



*análisis tales realizar un estudio inicial de los balances generales y estado de pérdidas o ganancias de la empresa, considerando en el mismo, cuales son las cuentas de mayor participación, cuáles cuentas fueron las que en los dos últimos periodos experimentaron mayores aumentos y cambios.*

*Inicialmente ello permitirá establecer ante qué clase de sociedad se va a analizar: una sociedad del sector comercial, donde debe predominar por sus movimientos la liquidez, una sociedad del sector industrial o manufacturero, donde predominara unos activos elevados, una sociedad dedicada a los servicios, que reflejara unos activos menores y una empresa del sector virtual que no reflejará activos fijos, ni patrimonio. Adicionalmente, poder establecer qué otras situaciones relacionadas a su constitución rodean a la empresa (s) objeto de estudio. Verificar de manera inicial sus socios, copropietarios o accionistas con el fin de establecer si aparecen con registros y anotaciones de autoridades competentes, o si éstos mismos aparecen en registros de la listas OFAC u otra lista a nivel internacional que maneje registros y posibles antecedentes judiciales o de tipo económico. Como parte de este proceso, debe además recopilarse el mayor número de evidencias, pruebas, operaciones inusuales, y operaciones sospechosas, entre otros.*

- *El conocimiento de estos términos es imperativo para el contador forense:*

*Indicio: situación que permite presumir e inferir algo, con fundamento cuestionable.*

- *Evidencia: Soporte obtenido que permite a través de él, llegar a una conclusión.*
- *Evidencia de Auditoría: Soporte o comprobante de origen interno o externo, obtenido por el contador forense, que le permite llegar a una conclusión, sobre la cual basará su opinión.*
- *Prueba: Forma con la cual cuentan los funcionarios judiciales, entre ellos el contador forense, para reconocer, atestiguar y soportar un hecho de carácter ilícito. Una o más evidencias nos pueden fundamentar una prueba sólida.*
- *Operación inusual: Operación, cuya cuantía o característica no guardan relación con el objeto social de la empresa. Operaciones que se dan en lapsos de tiempo relativamente corto y por cuantías monetarias exageradas y que además son frecuentes y repetitivas. Dentro de las mismas se deben tener en cuenta diferentes señales de alerta las cuales usualmente se manejan a nivel de instituciones privadas y particulares que nos permiten identificarlas.*
- *Operación sospechosa: Criterio subjetivo, basado en las normas de máxima experiencia de un hecho, de quien analiza, o registra una operación. Quien analiza o registra tiene en cuenta situaciones particulares sobre actividad económica o profesional, perfil financiero de quien se recibe, lo cual en algún momento puede llegar a fundar una sospecha o duda sobre esa situación en particular lo cual puede hacer que la misma se constituya en señal de alerta y por ende, entra a su análisis en profundidad.*

*Lo anterior, ayudara a construir de manera clara la prueba; a partir de los indicios, de la evidencia, de operaciones inusuales y sospechosas, profundizando más allá de la simple evidencia de auditoría, tratando al máximo de confrontar y verificar esos indicios, la misma evidencia, las operaciones inusuales, sospechosas y tratar de aplicarle la lógica, la secuencia, y la implicación que tienen esos hechos aislados sobre la contabilidad que ha sido presentada como legal.*

El contador forense está llamado y obligado a servir como testigo y como fuente experta en la explicación de los hechos que lo llevaron a concluir sobre un determinado caso. Un trabajo bien orientado y bien fundamentado, con suficientes soportes, análisis objetivo y lógico puede constituirse en una prueba irrefutable en contra de la persona natural y/o jurídica objeto de una investigación. Si estos preceptos son se cumplen, el testimonio del contador forense u otro experto puede ser controvertido por parte de la defensa quien puede solicitar que no se acepten como pruebas los soportes presentados por el experto contable.

*Sobre el testimonio del contador forense como experto en materia contable, él o ella tienen que estar preparados para explicar en forma clara y sin uso de términos técnicos cómo se llevó a cabo una operación o registros para descubrir y evidenciar ante un juez o estrado judicial cómo una persona natural y/o jurídica pudo aparentar legalidad de un dinero proveniente de actividades ilícitas. Ello se logra con el uso de ayudas audiovisuales como:*

- *Cuadros comparativos dentro de los cuales se incluyan los estados financieros básicos comparativos entre periodos. De acuerdo a los resultados, explicar y justificar el comportamiento de estas cifras.*
- *Cuadros por separados de cuentas y cifras entre períodos que puedan estar comprometidas en fraudes o legalización de dinero ilícito.*
- *Gráficos de comparativos. Bastante importante, toda vez que los gráficos ayudan a entender comportamientos y cambios entre períodos de manera rápida y sin necesidad de explicaciones adicionales.*
- *Cuadros comparativos entre un ciclo transaccional lógico y ceñido a la norma. Mostrar lo que es un ciclo transaccional acomodado a las circunstancias del delincuente o lavador para dar apariencia de legalidad.*
- *Escanear de los documentos originales. Los apartes que el contador forense considere necesarios para probar un hecho ilícito o para facilitar la identificación de un registro falso que pudiera servir para reflejar una cifra con apariencia de legal antes de que el contador forense descubriera su naturaleza ilícita.<sup>31</sup>*

Por todo lo dicho, es menester otorgar una mayor fuerza a las investigaciones en las que intervengan contadores forenses y dotar a estas áreas de la instrumentación necesaria y la preparación profesional que requiere el análisis y manejo de

---

<sup>31</sup> <http://contabilidadforense.org/blog/>

procedimientos penales en los que involucran millonarias cantidades de dinero y en que se ven comprometidas instituciones financieras, compañías y hasta el sector público.

## CONCLUSIONES

- Una de las principales consecuencias de la proliferación de organizaciones lavadoras de dinero en países como el nuestro constituye la pérdida de control político y económico, donde las ganancias ilícitas menguan los presupuestos gubernamentales. Quienes blanquean dinero, no buscan invertir en algo que beneficie al país, su único afán es proteger sus ganancias y evitar que sean descubiertos sus orígenes ilegales. Esto genera pérdidas en rentas públicas, ya que disminuyen los ingresos gubernamentales por concepto de declaración de impuestos y perjudican a los contribuyentes honestos.

- De igual manera, la confianza en el mercado mundial de ser un país que genere seguridad es importante y que al verse afectado por éste fenómeno, nos perjudica a nivel internacional, un país que ofrece carta abierta a las actividades furtivas y no posee un marco de protección a inversionistas legalmente establecidos, representa una amenaza a nivel económico para la nación y evidencia un alto nivel de incertidumbre jurídica tanto para los inversionistas extranjeros como para el comercio nacional que debido a la propagación de negocios financiados por actividades derivadas del narcotráfico y similares se han visto obligados a reducir y en algunos casos extinguir sus actividades por la presencia de la competencia delincuencial.
- Los medios de prueba que han sido utilizados en los procesos que por lavado de activos se han iniciado en el país, poseen una gran debilidad práctica y no confieren suficientes elementos de certeza para su juzgamiento ya que se han limitado a los expresamente señalados por el código de procedimiento penal, restringiendo la aplicación de nuevas tácticas investigativas por falta de herramientas tecnológicas y capacitación del personal a cargo de estas operaciones. Esto ha significado al país un retroceso en la lucha contra la expansión de lavadores de dinero, pues sin la suficiencia de medios que evidencien la presencia de capitales de dudosa procedencia, es sumamente complejo establecer responsabilidades penales.

- El aspecto probatorio es, en definitiva, el más importante y complejo dentro del lavado de dinero. Es frecuente la ausencia de una prueba directa del delito por las extensas posibilidades de ocultamiento y camuflaje con las que las organizaciones criminales operan; por lo que se debe recurrir a la práctica de la prueba indirecta. Es posible llegar a la convicción judicial, en un proceso sobre la base de pruebas derivadas de indicios cuando estos cumplen con los requisitos, formales y materiales para su validez, sin embargo esta prueba se ha visto controvertida al insinuar que su aplicación atenta contra la presunción de inocencia, porque la sola presencia de indicios no es elemento suficiente para la declaración de culpabilidad de un individuo. Por tanto, es tarea elemental del fiscal apoyar los indicios recolectados en la investigación con las dilucidaciones más convincentes para que en la audiencia logre manifestarse la fuerza probatoria de estos elementos, que han sido ligeramente desvalorizados en la generalidad de procesos.
- La falta de preparación y capacitación del personal involucrado en estos asuntos, que va desde el grupo especializado de la policía, la actual Unidad de Análisis Financiero, la unidad de delitos financieros de fiscalía, hasta los jueces penales de todas las instancias, ha constituido una traba en la realización de procesos por lavado de dinero en el país, si bien no existe un gran volumen de causas por este delito que sirva de referencia para su posterior aplicación, es alarmante el hecho de que para emitir informes, dictámenes y hasta sentencias los responsables no

tengan una formación especializada en esta materia, y los procedimientos se extiendan más de lo estipulado por falta de herramientas e información.

- Existe a nivel nacional una limitada asignación de recursos económicos para equipamiento y preparación de las unidades de investigación y control de lavado de activos, especialmente en provincias, que limitan la celeridad en los procesos. La Unidad de Análisis Financiero ha experimentado una positiva transformación en pro de afianzar las operaciones de vigilancia y prevención, sin embargo se requiere un presupuesto adicional para la instrucción adecuada del personal operativo, e implementación de medios tecnológicos que les permitan efectuar su labor con dinamismo y eficiencia.

## **RECOMENDACIONES**

- Con respecto a los riesgos sociales, es menester frenar la proliferación de actividades lavadoras de dinero ya que, a diferencia de lo que se conceptúa, en la actualidad es en los sectores de menos recursos donde las organizaciones delincuenciales se enfocan al momento de realizar sus actividades, al tratarse de personas con necesidades económicas que no están en la mira de las autoridades, pues acceden a realizar actividades ilegales sin conocer sus consecuencias penales ni repercusiones a nivel económico a cambio de pequeñas retribuciones, es aquí donde se evidencian los efectos sociales de este delito.



- Contar con una carga probatoria de relevancia dentro de un proceso penal por lavado de activos requiere una serie de medidas que cada una de las instituciones y organismos reportantes que puedan estar involucradas deben poner en práctica para la consecución del fin último pero que por falta de registros contables asociados dificulta la investigación, es preciso re afianzar esta área. De igual manera es recomendable erradicar las dilaciones producidas en las investigaciones por falta de colaboración de los organismos a los que solicita información.
- Es de suma importancia realizar en cooperación con organizaciones internacionales especializadas la capacitación en materia de lavado de activos, tanto para el sector público como privado, la poca información que los profesionales inmersos han recibido, dificulta la conquista de los propósitos centrales de estos procedimientos. Existen a nivel internacional varias entidades que brindan asesoría y capacitación en materia de lavado de activos como son la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la Interamerican Community Affairs, La Asociación de Especialistas Certificados en Anti lavado de Dinero (ACAMS), El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otras. Que deberían ser consideradas por la Unidad de Análisis Financiero para la elaboración de seminarios y cursos de capacitación a los diferentes sectores vulnerables e instituciones involucradas.

- Adicionalmente se evidencia una significativa falta de personal capacitado para indagaciones financieras. Sería de utilidad contar con peritos e investigadores con conocimientos de contabilidad, derecho tributario, técnicas bancarias, transacciones financieras, operaciones bursátiles, asuntos de comercio exterior, operaciones inmobiliarias, etc. A pesar de que se ha reforzado el sistema de reportes a la Unidad de Análisis Financiero, por parte de instituciones y sujetos obligados, con la información y documentación proporcionada se deben realizar pericias especializadas que constituyan pruebas fehacientes de las actividades ilegales de los lavadores.
- Se requiere introducir nuevos métodos investigativos a los procedimientos nacionales, la experiencia indica que son insuficientes las medidas que se han utilizado en los procesos sustanciados pues no aportan a cabalidad todas las pruebas para la obtención de certeza para los juzgadores. Contar con agentes encubiertos y métodos de vigilancia electrónica y similares, requiere una asignación considerable de recursos humanos y económicos que debe ser considerada por el gobierno nacional debido a la grave amenaza que representa la proliferación de organizaciones criminales lavadoras que atentan contra la seguridad económica del país y su buen nombre a nivel internacional.

## BIBLIOGRAFIA

- Arenas Salazar Jorge, Valdés Moreno Carlos Eduardo, (2006), “*La Prueba Testimonial y Técnica*”, Consejo Superior De La Judicatura, Primera Edición, EDIPRIME Ltda. Colombia.
- Cáceres Ruiz Luis, (2006) *Delitos contra el patrimonio: Aspectos penales y criminológicos*, Editorial Visión Libros, España
- Cafferata Nores José, (2003) “*La Prueba en el Proceso Penal*”, Ediciones De Palma, tercera edición, Argentina.
- Carbonari Carlos, (2005), *Lavado de dinero, problema mundial: El régimen internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su impacto en la República Argentina*, Grupo Editor Latinoamericano, Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Argentina
- Cano Castaño Miguel Antonio,(2001), *Modalidades de lavado de dinero y técnicas para la prevención*, G&D Impresores, México
- Cano Castaño Miguel Antonio (2000), *La auditoria y la contabilidad en la detección y prevención del lavado de activos*; Published by the author, México

- Delgado García Dolores, (2006), *La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos -Perspectiva del Fiscal*, Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, España.
- Fierro Martínez Heliodoro, (2006), *La prueba en el derecho penal, sistema acusatorio*, Editorial Leyer, Colombia
- García Hoyos Juan Carlos, (2007) *De la coca a la cocaína: Una Historia Por Contar*, Centro de Estudios Políticos e Internacionales, Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales.
- García Gibson Ramón, (2009), *Prevención De Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo*, INACIPE. Instituto Nacional de Ciencias Penales, México.
- Estupiñán Gaitan Rodrigo, (2006) *Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: análisis de informe COSO I y II*, Colección textos universitarios , ECOE ediciones, Colombia
- Nova Martínez Andrés Leonardo, (2006) “*Tipología básica del lavado de activos en el sector financiero colombiano y responsabilidad del contador público*”, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Colombia.
- Oficina contra la Droga y el Delito, Programa Mundial Contra la Trata de Personas, (2007) *Manual Para La Lucha Contra La Trata De Personas*, Naciones Unidas, EUA.
- Pinto Ricardo/ Chevalier Ophelie, “*El delito de lavado de activos como delito autónomo. Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de prueba indiciaria*”. Editado y aprobado por el **Dr. Rafael Franzini** , © CICAD OEA

- Rincón Cuéllar Herman, (2001), *Los diferentes medios de prueba documental en el proceso penal*, CICAD/OEA, Guatemala.
- Vaca Andrade Ricardo,(2004), *El delito de lavado de activos en Ecuador: Conversión o transferencias de bienes*, Ecuador; Edino.
- Zavala Baquerizo Jorge, (1989) “*El Proceso Penal*”, Editorial EDINO Jurídico, Colombia.

## **DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y PAGINAS WEB**

- Departamento de Estado de Estados Unidos, Publicación Electrónica, *La Lucha Contra el Lavado de Dinero*, (2001) Vol. 6, N° 2 , recuperado de : <http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/ej/ijes0501.pdf>
- Levi Michael, *Lavado de Dinero: la banca privada se vuelve menos privada, documento electrónico*, recuperado de:<http://www.espectador.com/text/documentos/doc06151.htm>
- Estrada O, Omar, “*Derecho Procesal Penal II, Medios de prueba, La Prueba Pericial*”. Recuperado de: <http://endoko.com/wp-content/uploads/2010/12/PRUEBA-PERICIAL-Y-PROCESO-PENAL.pdf>
- GAFISUD, *Lavado De Dinero En El Sector Fútbol*, (2009), Recuperado de: (<http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/63/60/44753131.pdf> )
- GAFISUD, *\_Ecuador, Informe sobre evaluación mutua*, (2007), recuperado de: (<http://www.gafisud.info/pdf/InformeEcuador.pdf>
- Jiménez M, Ana L, “*El valor legal y probatorio de los documentos en diferentes soportes*”, recuperado de : [http://www.archivonacional.go.cr/pdf/valor\\_legal\\_probatorio\\_doc.pdf](http://www.archivonacional.go.cr/pdf/valor_legal_probatorio_doc.pdf)

- Moya Arjona Francisco, *El Sistema Financiero Español*, Recuperado de:  
(<http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml>)
- Revista Competencia, *Ecuador enfrentó al GAFI con éxito, el día que santo Tomás Moro le dio una mano*, recuperado de :  
<http://www.revistacompetencia.com/382/ecuador.php>
- *Sentencia Caso Cristian Elliot Machuca Parras, sobre lavado de dinero en el Salvador*, recuperado de:  
[http://cicad.oas.org/Lavado\\_Activos/ESP/Caso\\_Salvador\\_Cristian\\_LD.htm](http://cicad.oas.org/Lavado_Activos/ESP/Caso_Salvador_Cristian_LD.htm)
- UIAF, *Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo*, (2007),  
Recuperado de:  
<http://200.2.12.198/nede/files/archivos/tipologias%20de%20lavado.pdf>
- [http://200.2.12.198/nede/files/archivos/gi\\_money\\_laundering\\_spanish.pdf](http://200.2.12.198/nede/files/archivos/gi_money_laundering_spanish.pdf)
- <http://contabilidadforense.org/blog/>
- <http://www.aduana.gov.ec/contenido/historia.html>
- <http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/63/60/44753131.pdf>
- <http://www.bolsadequito.info/inicio/conozca-el-mercado/el-mercado-de-valores>
- <http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml>
- <http://www.gafisud.info/pdf/InformeEcuador.pdf>
- <http://www.superban.gov.ec>
- <http://www.espectador.com/text/documentos/doc06151.htm>

## TEXTOS LEGALES

- Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano

- Ley de Mercado de Valores
- Ley General de Instituciones del Sistema Financiero
- Ley Orgánica de Aduanas
- Ley Reformatoria de la Ley Para Reprimir el Lavado de Activos
- Ley de Compañías
- Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas
- Reglamento General a la Ley de Turismo;
- Reglamento de Casinos, Salas de Juego y Bingos Mecánicos;

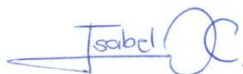
**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR**

**DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN**

Yo, María Isabel Ordóñez Cevallos, C.I 172160955-8, autora del trabajo de graduación titulado "La práctica de los distintos medios de prueba dentro de la investigación del delito de lavado de activos", previa a la obtención del título de LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS en la facultad de JURISPRUDENCIA:

1. Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENECYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.
2. Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través del sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de la Universidad.

Quito, 27 de octubre de 2011

  
C.I 1721609558